296

Señores:

**JUZGADO TERCERO (3) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
D.C.**

E. S. D.

SS 1794

JUZ 3 CIVIL CTO BOG

REF.: **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

JAN 13 '20 PM 3:00

EXPEDIENTE: 1100131030-03-2019-00700-00

↓ 72A + 1 ACC

DEMANDANTE: **INNOFAR S. A.**

DEMANDADOS: **PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.**

EDWIN ENRIQUE RODRIGUEZ NIÑO, mayor de edad, con domicilio y residencia en Bogotá D.C; abogado en ejercicio, identificado civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma; inscrito como apoderado judicial en el certificado de existencia y representación legal de **SCIENTIA CONSULTORES SAS**, sociedad de servicios jurídicos identificada con el NIT. **900.648.954-8**; en aceptación del poder especial legalmente conferido por el señor: **VICTOR ANDRÉS GÓMEZ ARDILA**, ciudadano colombiano mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.010.215.242 de Bogotá D.C., quien a su vez se determina como Apoderado General de la sociedad Española **PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A**, en virtud de Poder General otorgado por el señor **DON AITOR MADINA AGUIRRE**, mayor de edad, domiciliado en el Reino de España, en MIÑANO (ÁLAVA); y quien se identifica con D.N.I./N.I.F. 15378824N, actuando en calidad de representante legal de la sociedad española **PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.**, con C.I.F. 301404821; inscrita

en el Registro Mercantil de Álava, al tomo 1265, folio 182, hoja VI-11735, inscripción 1ª, todo de conformidad al Certificado de existencia y representación legal que se adjunta, sociedad que se determina como demandada en el proceso de la referencia, respetuosamente y dentro del término me permito contestar la demanda que cursa en su Despacho, en los siguientes términos:

**1. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO Y CONCRETO
SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

AL HECHO 1: Es cierto.

AL HECHO 2: No es un hecho, sino un planteamiento o juicio de valor realizado por la parte demandante.

AL HECHO 3: Es cierto.

AL HECHO 4: No es cierto. En primera medida, llamamos la atención en que, el Contrato allegado por el Accionante en la demanda, contiene una clara relación de la dirección de notificación correspondiente a la sociedad PRAXIS PHARMACEUTICAL. S.A.

Además de lo anterior, contrario a lo manifestado (y juramentado) por el accionante tanto en la demanda como en la subsanación, el Demandante contaba, además del contrato, con facturas de venta (las cuales igualmente fueron aportadas por el demandante), en las cuales se logra evidenciar que conocían la dirección correspondiente a la sociedad PRAXIS PHARMACEUTICAL. S.A. (España). Por lo anterior, el desconocimiento de la dirección de notificación de la sociedad en mención resulta, a todas luces, en una posibilidad

irrisoria, teniendo en cuenta la prolongada relación comercial que sostuvo PRAXIS PHARMACEUTICAL. S.A. (España) con INNOFAR S.A.

Es así pues que, se determina la mala fe del demandante, en el sentido de realizar una serie de afirmaciones que no corresponden a la realidad, Máxime cuando se determinaron "bajo gravedad de juramento", por lo cual solicitamos al señor Juez pronunciarse acerca de la gravedad de la conducta evidenciada, aplicando las sanciones a las que haya lugar.

AL HECHO 5: Es cierto.

AL HECHO 6: Es cierto.

AL HECHO 7: No se trata de un hecho, sino de una pretensión.

Además de lo anterior, llamamos la atención al Honorable Despacho en que, los registros mercantiles correspondientes a la existencia y representación legal de las sociedades, son documentos de carácter público en los diferentes Estados, incluyendo a España, por tanto, la posibilidad de acreditar la existencia y representación legal de cualquier sociedad es una posibilidad fáctica de toda persona, más aún si se tiene en cuenta las tecnologías de información actualmente existentes.

AL HECHO 8: Es cierto.

AL HECHO 9: Es cierto.

AL HECHO 10: No es un hecho, ni es cierto, es una apreciación jurídica y un juicio de valor realizado por el Demandante, con la intención de adelantar conclusiones y prejuizgamientos, que no corresponden a la realidad jurídica de la relación comercial o legal suscita entre PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA y PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

Además, se aclara que PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA, se determina como una persona jurídica independiente a sus socios, y no cuenta con el deber, ni la facultad legal para ejercer la administración de los negocios, ni la vocería en ningún aspecto legal de la compañía española, PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

Es entonces deber del Demandante acreditar a plenitud la facultad de administración de los negocios en Colombia de PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A, por parte de PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA, y de no ser posible probar esa aseveración, se encontraría ante un claro perjurio en detrimento de PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA, así como de la administración de justicia.

Por último, llamamos la atención al señor Juez para que, se pronuncie acerca de las irregularidades inaceptables en el acápite de los hechos de la demanda, en donde se amparan "deducciones" y "juicios de valor" por parte del demandante, con clara mala fe e intención de encaminar a un engaño a la administración de justicia.

AL HECHO 11: Es cierto; sin embargo, es necesario hacer claridad en que, se celebró una audiencia de conciliación, a la cual asistió en calidad de convocada representación de la sociedad

PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA, sin embargo, la misma no es la legitimada para actuar en trámite de conciliación, y en consecuencia no le es dable celebrar algún acuerdo conciliatorio en representación o mandato de PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

AL HECHO 12: Es parcialmente cierto, puesto que, si bien el apoderado especial manifestó la imposibilidad de asistencia de los representantes legales de la sociedad PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA, no se realizó ningún tipo de especificación de nombres propios, lo cual resulta nuevamente en deducciones del Demandante, que no corresponden a un hecho jurídico o factico efectivamente efectuado.

Además de lo anterior, se reitera que PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA no es la legitimada para actuar en trámite de conciliación, y en consecuencia no le es dable celebrar algún acuerdo conciliatorio en representación o mandato de PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

AL HECHO 13: No es un hecho sino una apreciación jurídica, y en todo caso no es cierto.

Nuevamente, manifestamos que, el Contrato allegado por el Accionante en la demanda, contiene una clara relación de la dirección de notificación correspondiente a la sociedad PRAXIS PHARMACEUTICAL. S.A.

Además de lo anterior, el Demandante contaba con facturas de venta en la cuales se logra evidenciar la dirección correspondiente a la sociedad PRAXIS PHARMACEUTICAL. S.A. (España). Por lo anterior, el desconocimiento de la dirección de notificación de la

sociedad en mención resulta, a todas luces, en una posibilidad irrisoria, teniendo en cuenta la prolongada relación comercial que sostuvo PRAXIS PHARMACEUTICAL. S.A. (España) con INNOFAR S.A.

Es así pues que, se determina la mala fe del demandante, en el sentido de realizar una serie de afirmaciones que no corresponden a la realidad, Máxime cuando se determinaron "bajo gravedad de juramento", por lo cual solicitamos al señor Juez pronunciarse acerca de la gravedad de la conducta evidenciada, aplicando las sanciones a las que haya lugar.

AL HECHO 14: No es un hecho, es una apreciación jurídica y un juicio de valor realizado por el Demandante, con la intención de adelantar conclusiones y prejuizgamientos, que no corresponden a la realidad jurídica de la relación comercial o legal suscita entre PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA y PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

Además, se aclara que PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA, se determina como una persona jurídica independiente a sus socios, y no cuenta con el deber, ni la facultad legal para ejercer la administración de los negocios, ni la vocería en ningún aspecto legal de la compañía española, PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

Nuevamente se determina el deber del Demandante acreditar a plenitud la facultad de administración de los negocios en Colombia de PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A, por parte de PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA, y de no ser posible probar esa aseveración, se encontraría ante un claro perjurio en detrimento

de PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LIMITADA, así como de la administración de justicia.

Por último, reiteramos un respetuoso llamado de atención al señor Juez para que, se pronuncie acerca de las irregularidades inaceptables en el acápite de los hechos de la demanda, en donde se amparan "deducciones" y "juicios de valor" por parte del demandante, con clara mala fe e intención de encaminar a un engaño a la administración de justicia.

AL HECHO 15: No es un hecho, corresponde a una pretensión, en la cual, además de manera directa emite una orden al honorable Despacho realizar pronunciamientos, ajenos a la realidad fáctica y jurídica.

AL HECHO 16: Es cierto.

AL HECHO 17: No es cierto, el objeto del preacuerdo es que:

"PRAXIS asume el compromiso de realizar sus mejores esfuerzos para la negociación y firma de un contrato de distribución y por el cual se le concederá a INNOFAR una licencia para distribuir, comercializar y vender el producto EPIPROT en Colombia, de acuerdo a las condiciones que se establezcan en el contrato y respetando las leyes locales y regulaciones aplicables".

Como se evidencia del texto anterior, el objeto del preacuerdo suscrito es la "promesa de suscripción" de un contrato, para la distribución, comercialización y venta de un determinado producto.

285

AL HECHO 18: No es cierto, la sociedad que se relaciona como filial es: PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA S.A., razón social que no existe como sociedad, según se determina por el sistema RUES. Además de lo anterior, se evidencia claramente que la sociedad enunciada no cuenta con individualizaciones de ningún tipo, que den fe de la existencia de la misma.

AL HECHO 19: No es cierto, la única sociedad que firmó el documento en mención fue PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

AL HECHO 20: Es parcialmente Cierto, Innofar como entidad independiente asumió un negocio en Colombia asociado a la comercialización bajo su cuenta y riesgo del producto EPIPROT, tal y como se determina en el Objeto del contrato en mención, a saber:

*"OBJETO. - PRAXIS concede a INNOF AR la licencia para la distribución, comercialización y marketing del producto EPIPROT® en el país de Colombia. En tal sentido INNOF AR procederá a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EPIPROT® en régimen de exclusividad, dentro de los límites territoriales de Colombia, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, y con pleno respeto a las leyes locales de Colombia, y cualesquiera otras normas y regulaciones que INNOFAR acepta la designación de DISTRIBUIDOR en las condiciones establecidas en el presente documento, manifestando que cuenta con todos los permisos legales necesarios para llevar a cabo el encargo asumido, sin que exista limitación ni reserva alguna que le impida distribuir el producto EPIPROT®, cuya distribución ahora se concede, **liberando por tanto a PRAXIS de***

cualquier responsabilidad o reclamación con respecto a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EIPROT®, la cual es directa e individualmente asumida por INNOFAR.” Subrayado y negrilla propia.

Se resalta que, en el mismo objeto del contrato se encuentra estipulado el régimen de responsabilidad, en el cual PRAXIS se encuentra exonerada de cualquier riesgo en la comercialización en Colombia, del producto EIPROT.

AL HECHO 21: Totalmente falsa, el Demandante realiza aseveraciones completamente contrarias a la realidad fáctica y legal determinada, mediante el uso de vocablos indiscriminados, pretende conducir al cambio en la percepción del objeto contractual suscrito con la sociedad española PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A, que por demás es completamente claro e inequívoco, y no da pie a amparar acepciones como “agente”.

En este punto es imperante poner de manifiesto la mala fe del demandante, en el sentido de imponer sus determinaciones, mediante la utilización de juicios de valor parcializados, con la finalidad dar amparo a falsas realidades jurídicas, demostrando una clara deslealtad para con el proceso jurisdiccional.

AL HECHO 22: Es totalmente falsa. Nuevamente me permito manifestar al señor Juez que, el objeto contractual no ampara ningún tipo o especie de agencia comercial, sino que se determina en:

"OBJETO. - PRAXIS concede a INNOFAR la licencia para la distribución, comercialización y marketing del producto EPIPROT® en el país de Colombia. En tal sentido INNOFAR procederá a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EPIPROT® en régimen de exclusividad, dentro de los límites territoriales de Colombia, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, y con pleno respeto a las leyes locales de Colombia, y cualesquiera otras normas y regulaciones que INNOFAR acepta la designación de DISTRIBUIDOR en las condiciones establecidas en el presente documento, manifestando que cuenta con todos los permisos legales necesarios para llevar a cabo el encargo asumido, sin que exista limitación ni reserva alguna que le impida distribuir el producto EPIPROT®, cuya distribución ahora se concede, **liberando por tanto a PRAXIS de cualquier responsabilidad o reclamación con respecto a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EPIPROT®, la cual es directa e individualmente asumida por INNOFAR.**" Subrayado y negrilla propia.

AL HECHO 23: Es cierto, puesto que las actividades desarrolladas por el Demandante, se estructuran como una necesidad propia del contrato como distribuidor independiente, y las tareas a realizar son evidentes en este tipo de relación contractual, donde, además, si el Distribuidor persigue el legítimo interés de percibir y aumentar sus ganancias, debe promover los productos asumiendo los riesgos del mercado.

AL HECHO 24: Es cierto.

AL HECHO 25: Es cierto.

AL HECHO 26: Es parcialmente cierto. Si bien es verdadera la cantidad de unidades o diales comprados por la demandante en favor del demandado, no es exacta la determinación del valor total en dólares pagados en favor de PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

AL HECHO 27: Es cierto, en la medida que, según se determina en la Cláusula Tercera, del contrato suscrito, a saber: "Duración", las partes pactaron:

"3.1.- El presente contrato de distribución, comercialización y marketing tendrá una duración de 5 años contados desde la fecha en que se produzca la efectiva inscripción de EPIPROT® a favor de PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA, S.A. en el registro de medicamentos de Colombia.

Si, transcurridos 2 años desde la firma del presente contrato, PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA, S.A. no hubiera obtenido la titularidad de EPIPROT® en Colombia, el presente contrato quedará sin efecto, en cuyo caso ninguna de las partes tendrá derecho a reclamar cantidad alguna por ningún concepto.

3.2. Llegado su vencimiento, el contrato podrá ser renovado por sucesivos períodos de dos años, siempre que se hayan cumplido los objetivos de ventas recogidos en el presente contrato (o en los sucesivos acuerdos de prórroga), y siempre que las partes lleguen a un acuerdo sobre los nuevos objetivos y precios a aplicar en los años sucesivos.

De no llegar las partes a un acuerdo antes de la finalización del contrato, éste quedará resuelto sin que se produzca la prórroga establecida en el párrafo anterior. (...)" Subrayado y negrilla propia.

AL HECHO 28: Es cierto.

AL HECHO 29: Es parcialmente cierto. Es cierto los términos de renovación pactados, determinados por el Demandante, sin embargo, hay que tener en cuenta que existían muchas más condiciones para que se produjese esta renovación, la más importante el mutuo acuerdo entre las partes.

Sin que coexistieran estas condiciones, se desembocaría en la terminación de la relación contractual, esto es, por ejemplo, los casos de incumplimiento de parte de INNOFAR, a saber:

"VIGESIMA. - EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN. - *El presente contrato quedará definitivamente extinguido a la finalización del mismo.*

También quedará resuelto el presente contrato si - llegada la finalización del plazo pactado, o de cualquiera de sus prórrogas- las partes no hubieren llegado a un acuerdo para la determinación de los nuevos objetivos mínimos de venta y precios.

No obstante, ello, el contrato quedará resuelto en cualquier momento, si concurre alguno de los siguientes hechos citados con carácter enunciativo y no limitativo:

- A) *Cualquiera de los establecidos en la Ley como causa de resolución.*
- B) *El mutuo acuerdo de las partes.*
- C) *La venta o comercialización por parte del DISTRIBUIDOR de productos similares a EIPROT®, que le hagan competencia, o que puedan colisionar en el mercado con EIPROT®, y que hayan sido suministrados por personas distintas de PRAXIS.*
- D) *La resistencia del DISTRIBUIDOR a la supervisión e inspección prevista en la cláusula decimotercera.*
- E) *Sin perjuicio de lo que pueda disponer en contrario cualquier Ley aplicable, cualquiera de las partes podrá dar fin al presente contrato notificándolo a la otra parte, en cualquiera de las formas previstas en el presente contrato, en el supuesto de que cualquiera de ellas quede sujeta a procedimiento de quiebra, suspensión de pagos u otros similares, tanto si tienen carácter voluntario como involuntario.*
- F) *La demora en los pagos por EL DISTRIBUIDOR.*
- G) *El hecho de no alcanzarse los objetivos mínimos de compra previstos por la estipulación decimosegunda del presente contrato y en el Anexo III en el acumulado de los tres primeros años.*
- H) *No respetar los límites territoriales de la distribución exclusiva otorgada.*
- I) *El realizar actividades, maquinaciones o actuaciones fraudulentas, contrarias a la buena fe que debe presidir el cumplimiento de los contratos por parte de los intervinientes.*
- J) *No mantener el DISTRIBUIDOR el stock necesario para atender adecuadamente el suministro de su zona.*

K) *No haber alcanzado un acuerdo en los objetivos del año dentro de los plazos establecidos en la cláusula decimosegunda, punto 1.*

M) *Cambiar la composición accionarial dominante, salvo autorización escrita de PRAXIS.*

N) *No ejecutar íntegramente y en plazo el presupuesto de marketing previsto en la cláusula décima, punto 1, o no adoptar medidas de precios y promoción de ventas que en su momento pueda exigir PRAXIS, conforme a lo estipulado en la cláusula décima, punto 5.*

Ñ) *En general el incumplimiento por el DISTRIBUIDOR de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente contrato por cualquiera de las partes.*

En el supuesto de incumplimiento por parte del Distribuidor, PRAXIS podrá optar, de conformidad con lo prevenido en el artículo 1.124 del Código Civil Español, entre exigir el cumplimiento de la obligación o resolver el contrato con derecho a ser resarcida en los daños y perjuicios que ello origine, así como al abono de los intereses que se devenguen.

La resolución deberá comunicarse con al menos un mes de antelación a la otra parte". Subrayado y negrilla propia.

Como se puede evidenciar, existían múltiples razonamientos que conllevarían a la terminación de la relación contractual, y no solo el término de ejecución, como lo hace parecer el Demandante.

Además, la cláusula tercera del contrato relativa a la *Duración* señala:

292

"3.2.- Llegado su vencimiento, el contrato podrá ser renovado por sucesivos períodos de dos años, siempre que se hayan cumplido los objetivos de ventas recogidos en el presente contrato (o en los sucesivos acuerdos de prórroga), y siempre que las partes lleguen a un acuerdo sobre los nuevos objetivos y precios a aplicar en los años sucesivos.

De no llegar las partes a un acuerdo antes de la finalización del contrato, éste quedará resuelto sin que se produzca la prórroga establecida en el párrafo anterior."

Por lo que estamos frente a una cláusula de extinción o finalización automática del contrato, lo que equivale a que se podía terminar el contrato sin necesidad de dar previo aviso.

En efecto, la finalización del vínculo contractual surgió debido a que INNOFAR incumplió sistemáticamente el contrato como se ha señalado.

AL HECHO 30: No es cierto, entre otras cosas, como se determina en los contratos, Innofar incumplió sistemáticamente con las obligaciones propias de su carácter de distribuidor, entre ellas el pago del producto en favor de PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A, tal y como se determina en los acuerdos, contratos y convenios aportados por el mismo Demandante.

AL HECHO 31: No es un hecho, se trata de una argumentación injustificada realizada por parte del demandante, toda vez que no se encuentra un nexo causal determinante de la existencia de una

relación contractual entre mi Poderdante, con la posibilidad o no de que el demandante realice venta a sus clientes.

En este punto, la comercialización de parte de INNOFAR podría atribuirse a varias hipótesis de continuidad en las ventas, como por ejemplo existencias de stocks, o venta sin respaldo del producto en concreto.

AL HECHO 32: Es parcialmente cierto, en la medida que, si bien se da la terminación de la relación contractual por parte de mi Poderdante, la misma se justifica en el constante y prolongado incumplimiento de Innofar en sus obligaciones, específicamente la de pago del producto vendido por Praxis, lo cual llevó a mi Poderdante a terminar la relación.

Se resalta que, como se determina en los documentos "acuerdo de cesión" y "acuerdo de pago" las partes aceptaron la existencia de una deuda la cual ascendía a un valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS** de los Estados Unidos de América (**USD \$4,795,227.79**).

Se deja además justificación de que, a PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A le es legítimo realizar acciones enfocadas a obtener el pago de obligaciones a su favor, incluyendo suscripción de acuerdos y contratos de distinta índole.

Por último, manifestamos al señor Juez que, la sociedad INNOFAR adeuda a mi Poderdante, según lo registrado en el balance de situación, a corte del 30 de noviembre de 2019 la totalidad de USD. (\$1.131.764,27), equivalentes a (1.039.364,74 euros).

AL HECHO 33: No es un hecho que deba constar a mi Poderdante, toda vez que el interés de la misma siempre fue obtener el pago de la deuda en cabeza de INNOFAR, lo cual la facultó para terminación de contrato, según lo determinado mediante la cláusula 20 del mismo.

AL HECHO 34: Es cierto, según lo estipulado mediante la Cláusula Tercera del contrato de distribución suscrito.

AL HECHO 35: No me constan las ganancias, pues si bien hay un precio de compra a Praxis establecido, Innofar tuvo que asumir los costos de importación, marketing, distribución, capacitación, y demás costos determinados en el contrato suscrito, con el objetivo de realizar la venta del producto importado a Colombia.

Además de lo anterior, en el contrato se determina un valor mínimo de venta de cada dial del producto EPIPROT, pero mi poderdante no interfiere en ningún punto en un valor máximo o real de venta en el mercado, lo anterior sin contar con descuentos, promociones, colaboraciones, aumentos de valor por costos o gastos intrínsecos, y demás externalidades que pudieren afectar los márgenes de ganancias de Innofar.

AL HECHO 36: No es cierto, puesto que las sociedades aquí mencionadas contaban con igualdad de oportunidades de negociación y margen de acción en la relación jurídica que las vinculada; tanto así es que se dio oportunidad a INNOFAR para que pagara las obligaciones vigentes, sin la iniciación de procesos judiciales coactivos, a los que sin duda alguna había lugar.

295

Además de lo anterior, los cambios o modificaciones en el marco de las relaciones contractuales no se estructuran como un hecho objetivo que pueda ser probado con simples documentos o manifestaciones caprichosas, sino que dependen de complejos procesos de negociación, con base en parámetros como buena fe, lealtad... entre otros.

AL HECHO 37: Es parcialmente cierto, sin embargo, No me constan las ganancias, pues si bien hay un precio de compra a Praxis establecido, Innofar tuvo que asumir los costos de importación, marketing, distribución, capacitación, y demás costos y gastos determinados en el contrato suscrito, con el objetivo de realizar la venta del producto importado a Colombia.

Además de lo anterior, en el contrato se determina un valor mínimo de venta de cada dial del producto EPIPROT, pero mi poderdante no interfiere en ningún punto en un valor máximo o real de venta en el mercado, lo anterior sin contar con descuentos, promociones, colaboraciones, aumentos de valor por costos o gastos intrínsecos, y demás externalidades que pudieren afectar los márgenes de ganancias de Innofar.

AL HECHO 38: No me consta, en el mismo sentido de lo anteriormente relacionado.

AL HECHO 39: No me consta, en el mismo sentido de lo anteriormente relacionado.

AL HECHO 40: No me consta, en el mismo sentido de lo anteriormente relacionado.

296

AL HECHO 41: No me consta, en el mismo sentido de lo anteriormente relacionado.

AL HECHO 42: No es un hecho, es un juicio de valor y concomitantemente una pretensión; adicionalmente No es cierto.

En primera medida, lo relacionado en el numeral 42 se trata de un juicio de derecho o valor determinado por el Demandante, planteado en condiciones de prejuzgamiento, sin dar oportunidad al desarrollo del presente proceso jurisdiccional.

En segunda medida, se manifiesta que la redacción del texto trata más de una pretensión que de cualquier tipo o especie de hecho, por no corresponder al elemento factico requerido en la jurisdicción procedimental vigente.

En tercera medida, se hace énfasis nuevamente en que NUNCA se suscribió un contrato de agencia comercial entre las partes, sino que se trataba de una relación jurídica en el marco de un contrato de distribución exclusiva del producto EIPROT en el territorio colombiano, tal y como se especifica en el objeto contractual, a saber:

"OBJETO. - PRAXIS concede a INNOFAR la licencia para la distribución, comercialización y marketing del producto EIPROT® en el país de Colombia. En tal sentido INNOFAR procederá a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EIPROT® en régimen de exclusividad, dentro de los límites territoriales de Colombia, de acuerdo con

las condiciones establecidas en el presente contrato, y con pleno respeto a las leyes locales de Colombia, y cualesquiera otras normas y regulaciones que INNOFAR acepta la designación de DISTRIBUIDOR en las condiciones establecidas en el presente documento, manifestando que cuenta con todos los permisos legales necesarios para llevar a cabo el encargo asumido, sin que exista limitación ni reserva alguna que le impida distribuir el producto EPIPROT®, cuya distribución ahora se concede, liberando por tanto a PRAXIS de cualquier responsabilidad o reclamación con respecto a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EPIPROT®, la cual es directa e individualmente asumida por INNOFAR." Subrayado y negrilla propia.

AL HECHO 43: No es un hecho, en el mismo sentido de lo anteriormente relacionado.

AL HECHO 44: No es un hecho, es un juicio de valor y concomitantemente una pretensión; adicionalmente No es cierto.

AL HECHO 45: No me consta, Puesto que las actividades económicas de Innofar se determinan en diferentes campos o actividades comerciales, y no solamente a la venta o comercialización del Epirot, como, por ejemplo, entre otras, las registradas en las redes sociales (Facebook) de la compañía, a saber:

"INNOFAR S.A. es una empresa farmacéutica especializada en servicios de Outsourcing, marketing, promoción, distribución y comercialización de productos Éticos, Dermocosméticos y Nutricionales en Colombia.

INNOFAR S.A. es una empresa fundada en el año 2002, nuestra actividad está dirigida hacia la industria farmacéutica en general, con prestación de servicios Outsourcing de fuerzas de promoción, programas para pacientes, distribución de productos, selección de personal, capacitación y formación farmacéutica"¹.

De lo anterior, se sustrae un amplio grado de actividad comercial en la que desarrolla sus actividades comerciales, promocionando servicios homólogos a los desarrollados en la actividad comercial llevada con PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

En el mismo sentido de lo anteriormente estipulado, se determina la declaración extra procesal rendida por la señora **ELIZABETH ROMERO CALDERON**, quien se desempeñó como "**Gerente de instituciones y entrenamiento**" en la empresa **INNOFAR**, en el periodo comprendido entre el 10 de enero del 2014 y el 30 de septiembre del 2017, y que da cuenta de la divergencia de actividades comerciales desarrolladas por el demandante en dicho periodo de tiempo.

AL HECHO 46: Parcialmente cierto, puesto que, si bien se firmó el mencionado acuerdo de pagos, la deuda en el relacionada no fue una imposición realizada o determinada unilateralmente por mi

¹https://www.facebook.com/pg/Innofar-SA-146248388761125/about/?ref=page_internal

Poderdante, sino una deuda mutuamente declarada como cierta, en tanto en el mismo acuerdo se determina que:

1. *Que las Partes suscribieron el 14 de abril de 2011 un contrato para la distribución, comercialización, y marketing en Colombia (el "Contrato de Distribución") en virtud del cual el Acreedor concedió al Deudor la licencia exclusiva de distribución, comercialización y marketing del medicamento Epirot en Colombia.*
2. *Que el Deudor incumplió sistemáticamente el pago de los suministros, por lo que a la fecha de celebración del presente Acuerdo existen sumas de dinero que el Deudor adeuda al Acreedor originadas en la relación comercial mencionada (el "Impago de Suministros").*
3. *Que, en razón al Impago de Suministros, las Partes suscribieron el Suplemento No. 1 al Contrato de Distribución (el "Suplemento No. 1") en virtud del cual el Deudor se obligó a cancelar la deuda, así: (i) endosando al Acreedor las facturas correspondientes a la venta de Epirot; (ii) constituyendo un fideicomiso de administración y fuente de pagos cuyo objeto sea recaudar los recursos provenientes de la venta de Epirot y entregarlos al Acreedor; (iii) instruyendo a sus clientes el depósito de la totalidad de los recursos derivados de las ventas de Epirot en favor del fideicomiso; (iv) solicitando a sus clientes un certificado en el que conste su aceptación de pagar la factura al patrimonio autónomo y entregarlo al Acreedor.*
4. *Que el Suplemento No. 1 extendía la duración del Contrato de Distribución hasta el 31 de marzo de 2017. En consecuencia, el Contrato de Distribución terminó por vencimiento del plazo.*

5. *Que el Deudor endosó al Acreedor las facturas correspondientes a la venta de Epirot, pero el pago de algunas de ellas no fue depositado en las cuentas del Acreedor ni en las cuentas del fideicomiso.*
6. *Que el Deudor, con objeto de facilitar el cobro por parte del Acreedor de las facturas endosadas, celebró con FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA (la "Fiduciaria") un contrato de fiducia mercantil de administración y fuente de pagos (el "Contrato de Fiducia") en virtud del cual la Fiduciaria, en su calidad de vocera del fideicomiso, tiene la instrucción expresa e irrevocable de entregar al Acreedor los recursos provenientes de la venta de Epirot, en su calidad de destinatario preferente de pago.*
7. *Que, bajo el Contrato de Fiducia, el Deudor también se obligó a instruir a sus clientes el depósito de la totalidad de los recursos derivados de las ventas de Epirot en favor del fideicomiso para la atención de la deuda.*
8. *Que algunos clientes del Deudor se han resistido a pagar las facturas al patrimonio autónomo, por lo que el Deudor sigue recaudando ciertos recursos provenientes de la venta de Epirot.*
9. *Que el Deudor sólo ha transferido al Acreedor un porcentaje de los recursos provenientes de la venta de Epirot para atender la deuda, pero ha retenido otro porcentaje de tales recursos (los "Recursos Retenidos").*
10. *Que a la fecha el Deudor debe al Acreedor la suma total de cuatro millones setecientos noventa y cinco mil doscientos veintisiete dólares con setenta y nueve centavos de los Estados Unidos de América (USD\$4,795,227.79) integrada por: (i) los Recursos Retenidos los cuales*

ascienden a la suma de [un millón setecientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América (USD\$1, 752,343.00)]; y (ii) el Impago de Suministros lo cual asciende a la suma de [tres millones cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro dólares con setenta y nueve centavos de los Estados Unidos de América (USD\$3,042,884.79) (la "Deuda").

11. Que a la fecha el Deudor reconoce que adeuda a las personas que se indican en el Anexo 3 remuneraciones o pagos por servicios prestados en relación con la distribución del Producto (los "Servicios no Pagados").
12. Que el Acreedor pagará por cuenta y a nombre del Deudor por los Servicios no Pagados, momento a partir del cual dicho pago incrementarán el monto de la Deuda y serán liquidados junto al último instalamento que deba pagar el Deudor. Igualmente incrementarán el monto de la Deuda los pagos que el Acreedor realice en favor de terceros por Servicios no Pagados cuya prestación sean capaces de demostrar tales terceros, a pesar de que no aparezcan reflejados en el Anexo 3.
13. Que a la fecha el Deudor ha vendido a Praxis Pharmaceutical Colombia Ltda. dos mil novecientos veintiún (2,921) viales de Epirot que conforman el stock actual del Deudor (la "Venta a Praxis Colombia").
14. Que el Deudor reconoce la existencia y exigibilidad de la Deuda y, por ende, se compromete a pagarla en los términos y condiciones que se establecen en el presente Acuerdo.
15. Que el Deudor entiende y reconoce que con la suscripción del presente Acuerdo el Acreedor no renuncia, de ninguna manera, a las acciones legales de toda naturaleza a que

pueda tener derecho derivadas de la Deuda y de lo acaecido en la relación contractual.

16. *Que el Deudor y Praxis Pharmaceutical Colombia Ltda., ("Praxis Colombia") suscribirán en la misma fecha de suscripción del presente Acuerdo un contrato de colaboración empresarial (el "Contrato de Colaboración"), el cual se adjunta al presente Acuerdo como Anexo 2.*
17. *Que el Deudor cederá al Acreedor los derechos crediticios de las facturas identificadas en el Anexo 1 en los términos pactados en el Anexo 5 (el "Contrato de Cesión de Crédito"), el cual será suscrito de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo".*

En las anteriores consideraciones, se determina la naturaleza, origen, monto y demás características de la deuda suscita entre las partes, por ello ahora resulta desleal y contradictorio que el Demandante argumente que se trataba de imposiciones arbitrarias de mi Poderdante, cuando en la fecha de suscripción del acuerdo no mostró inconformidad, y contraria a ello ratificó la existencia de dichas obligaciones, aun convirtiendo a sus directivos en deudores solidarios, como se determina en la cláusula Segunda del Acuerdo, que determina:

"Comparecen Alcibíades Tautiva Lindado, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.259.615 y Jaime Iván González, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.381.947 (los "Codeudores"), quienes garantizan Incondicional, irrevocable y solidariamente entre sí y con respecto al Deudor el pago de la Deuda. En consecuencia, el Acreedor podrá exigir su cumplimiento tanto al Deudor como a los Codeudores."

AL HECHO 47: No es cierto, el origen fue el relacionado en los antecedentes anteriormente transcrito, a saber: el impago.

AL HECHO 48: Es totalmente falsa.

En las consideraciones anteriormente transcritas, (las cuales fueron declaradas de común acuerdo por las partes y sin objeción alguna del Demandante), se estipulan clara e inequívocamente las intenciones de las partes al suscribir el mencionado acuerdo de pagos.

En suma, con lo anterior, me permito llamar la atención a la cláusula Décima Tercera del Acuerdo de pago, la cual establece que:

"DÉCIMA TERCERA. ELABORACIÓN CONJUNTA: *Las Partes han participado conjuntamente en la negociación y preparación del presente Acuerdo. En caso que surja una ambigüedad o asunto en relación con su intención o interpretación, el presente Acuerdo se interpretará de buena fe. Igualmente, las dudas se resolverán de buena fe".*

Por todo lo anterior, se establece que la afirmación relacionada en el hecho número 48 de la demanda, se determina como una afirmación mentirosa e irresponsable por parte del Demandante, por cuanto primero suscribe Acuerdos, en los cuales afirma y declara haber participado en su elaboración, y posteriormente protesta su participación o acuerdo, arguyendo supuestos de presión o inferioridad fáctica y/o comercial.

AL HECHO 49: Es totalmente falso,

En el mencionado Acuerdo de pago se determina la naturaleza, origen, monto y demás características de la deuda suscita entre las partes, por ello ahora resulta desleal y contradictorio que el Demandante argumente que se trataba de imposiciones arbitrarias de mi Poderdante, cuando en la fecha de suscripción del acuerdo no mostro inconformidad, y contrario a ello ratificó la existencia de dichas obligaciones, aun convirtiendo a sus directivos en deudores solidarios, como se determina en la cláusula Segunda del Acuerdo, que estipula:

"Comparecen Alcibíades Tautiva Lindado, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.259.615 y Jaime Iván González, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.381.947 (los "Codeudores"), quienes garantizan Incondicional, irrevocable y solidariamente entre sí y con respecto al Deudor el pago de la Deuda. En consecuencia, el Acreedor podrá exigir su cumplimiento tanto al Deudor como a los Codeudores."

En suma, con lo anterior, reiteramos lo estipulado en la cláusula Décima Tercera del Acuerdo de pago, la cual establece que:

"DÉCIMA TERCERA. ELABORACIÓN CONJUNTA: *Las Partes han participado conjuntamente en la negociación y preparación del presente Acuerdo. En caso que surja una ambigüedad o asunto en relación con su intención o interpretación, el presente Acuerdo se interpretará de buena fe. Igualmente, las dudas se resolverán de buena fe".*

Por todo lo anterior, se establece que la afirmación relacionada en el hecho número 49 de la demanda, se determina como una

manifestación mentirosa e irresponsable por parte del Demandante, por cuanto primero suscribe Acuerdos, en los cuales afirma y declara haber participado en su elaboración, y posteriormente protesta su participación o acuerdo, arguyendo supuestos de presión o inferioridad fáctica y/o comercial.

AL HECHO 50: No es cierto, en el mismo sentido de la contestación anterior.

AL HECHO 51: No es cierto, la proposición completa es falsa, en la medida que la sociedad española PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A. estaba legitimada para ejercer las conductas necesarias para obtener el pago de los créditos adeudados, entre ellas las de formular o celebrar los acuerdos o contratos a los que hubiere lugar.

A su vez, la sociedad colombiana PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA, suscribió el contrato de colaboración empresarial referido, por las motivaciones que en el mismo se registran, a saber:

- 1. Que Praxis Colombia es el importador y distribuidor exclusivo del medicamento Epirot (el "Producto") en Colombia y cuenta con un alto grado de conocimiento del mercado farmacéutico mundial.*
- 2. Que Innofar es una empresa farmacéutica con un alto grado de conocimiento del mercado hospitalario.*
- 3. Que las Partes están interesadas en unir esfuerzos para mejorar el servicio de visitas médicas a profesionales de la salud y el de atención a pacientes durante el proceso médico con el fin de incrementar la venta del Producto en Colombia.*

4. Que, a la fecha de suscripción del presente Contrato, Innofar debe a PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A., sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de España, identificada con CIF A-01405042 ("Praxis España") la suma total de **cuatro millones setecientos noventa y cinco mil doscientos veintisiete dólares con setenta y nueve centavos** de los Estados Unidos de América (USD\$4,795,227.79) (la "Deuda").
5. Que, con el objeto de regular el pago de la Deuda, Innofar y Praxis España en la misma fecha de suscripción del presente Contrato suscriben un acuerdo de pagos (el "Acuerdo de Pagos") el cual se adjunta al presente Contrato como Anexo 1.
6. Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Pagos los ingresos que correspondan a Innofar y que se deriven de la ejecución del presente Contrato serán transferidos por Praxis Colombia a Praxis España como abono de la Deuda.
7. Que el presente Contrato terminará el día en que Innofar pague a Praxis España la totalidad de la Deuda.

En las consideraciones anteriormente transcritas, (las cuales fueron declaradas de común acuerdo por las partes y sin objeción alguna del Demandante), se estipulan clara e inequívocamente las intenciones de las partes al suscribir el mencionado contrato de colaboración. En suma, de lo anterior, me permito llamar la atención a la cláusula Vigésima Primera del contrato de colaboración, la cual establece que:

"CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. ELABORACIÓN CONJUNTA- Las Partes han participado conjuntamente en la

negociación y preparación del presente Contrato. En caso de que surja una ambigüedad o asunto en relación con su intención o interpretación, el presente Contrato se interpretará de buena fe. Igualmente, las dudas se resolverán de buena fe y de acuerdo a la legislación vigente."

Por todo lo anterior, se establece que la afirmación relacionada en el hecho número 51 de la demanda, se determina como una afirmación mentirosa e irresponsable por parte del Demandante, por cuanto primero suscribe contratos en los cuales afirma y declara haber participado en su elaboración, y posteriormente protesta su consentimiento informado, arguyendo supuestos de presión o inferioridad fáctica y/o comercial.

AL HECHO 52: Es Falso, al igual que se determina en la justificación correspondiente al hecho anterior, el demandante recae en comportamientos de mala fe, deslealtad comercial e intención de engañar al señor Juez, al negar su elemento participativo en el contrato en mención, aun cuando de la simple lectura de los determinados acuerdos, se evidencia la igualdad jurídica y participación mancomunada en los acuerdos celebrados.

Además de lo anterior, el contrato de colaboración ahora protestado de parte del Demandante, no era otra cosa que un medio para que el mismo tuviese herramientas para satisfacer el crédito adeudado a mi Poderdante que a la fecha de suscripción del acuerdo ascendían a la totalidad de: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS** de los Estados Unidos de América (**USD \$4,795,227.79**).

Por último, manifestamos al señor Juez que, la sociedad **INNOFAR** adeuda a mi Poderdante, según lo registrado en el balance de situación, a corte del 30 de noviembre de 2019 la totalidad de USD. (\$1.131.764,27), equivalentes a (1.039.364,74 euros).

AL HECHO 53: Es completamente falso.

En primera medida, por lo anteriormente registrado en la presente contestación, se establece la participación mancomunada de las partes en todos cada uno de los contratos o acuerdos suscritos.

En segunda medida, las actividades económicas de Innofar se determinan en diferentes campos o actividades comerciales, y no solamente a la venta o comercialización del Epirot, como, por ejemplo, entre otras, las registradas en las redes sociales (Facebook) de la compañía, a saber:

"INNOFAR S.A. es una empresa farmacéutica especializada en servicios de Outsourcing, marketing, promoción, distribución y comercialización de productos Éticos, Dermocosméticos y Nutricionales en Colombia.

INNOFAR S.A. es una empresa fundada en el año 2002, nuestra actividad está dirigida hacia la industria farmacéutica en general, con prestación de servicios Outsourcing de fuerzas de promoción, programas para pacientes, distribución de productos, selección de personal, capacitación y formación farmacéutica"2.

²https://www.facebook.com/pg/Innofar-SA-146248388761125/about/?ref=page_internal

De lo anterior, se sustrae un amplio grado de actividad comercial en la que desarrolla sus actividades comerciales, promocionando servicios homólogos a los desarrollados en la actividad comercial llevada con PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

Por último, llamamos la atención al señor Juez acerca de la enunciación de los servicios ofertados por el Demandante, los cuales son los que al día de hoy pretende hacer valer como un contrato de agencia comercial, demostrando nuevamente una clara falta de deslealtad comercial y mala fe, en el sentido de ofertar una relación comercial específica, y luego pretender pagos injustificados haciéndola valer por agencias comerciales.

AL HECHO 54: Es completamente falso.

Según se determinó en la Cláusula Quinta del contrato de colaboración suscrito, la distribución de utilidades se realizaría de la siguiente manera:

"CLÁUSULA QUINTA. DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS -

Los Gerentes de la Operación se reunirán dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al corte de cada mes con el fin de liquidar el porcentaje de participación que corresponde a cada una de las Partes, lo cual se realizará única y exclusivamente sobre los ingresos efectivamente percibidos y no sobre derechos de cobro o cuentas por cobrar generadas en favor de Praxis. En caso que, cumplido el término de duración del presente Contrato, no se haya cancelado la totalidad de la Deuda, pero Praxis Colombia haya emitido las facturas cuyo pago cancelaría la totalidad de la misma, el término de duración del presente

Contrato se prorrogará por el mismo tiempo que tiene el(los) respectivo(s) Cliente(s) para el pago de la factura con el único fin de recaudar el dinero. En todo caso, esta prórroga no podrá superar un término de noventa (90) días calendario.

De cualquier manera, si los Clientes incumplen con el pago de las facturas, el porcentaje de participación correspondiente a Innofar tendrá que ser asumido por el Deudor.

Esta liquidación se hará constar en un acta firmada por cada uno de los Gerentes de la Operación, y la misma hará parte integral del presente Contrato.

Los porcentajes de participación que corresponden a cada una de las partes son los siguientes:

- (i) Ochenta y siete por ciento (87%) de los ingresos netos para Praxis Colombia; y*
- (ii) Trece por ciento (13%) de los ingresos netos para Innofar."*

Ahora bien, tal y como se determinó ya en varias oportunidades, la finalidad o interés fundamental para la suscripción de los correspondientes acuerdos, era la de facilitar a Innofar la posibilidad de satisfacer el crédito adeudado a PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A., que a la fecha de suscripción del acuerdo ascendían a la totalidad de: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS** de los Estados Unidos de América (**USD \$4,795,227.79**); es por ello que en inciso correspondiente a la misma cláusula Quinta del contrato, las partes establecen que:

"Innofar autoriza a Praxis Colombia a retener el cien por ciento (100%) del porcentaje de participación que le corresponde con el fin de que éste sea transferido directamente a Praxis España como abono de la Deuda hasta el día en que Innofar cancele la totalidad de la misma de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Pagos".

Con todo lo anterior, se comprueba nuevamente la irresponsabilidad y falsedad en las manifestaciones realizadas por Innofar en la demanda presentada a su Despacho, en el sentido de afirmar que "El 100% de la utilidad sería para PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA LTDA", cuando es claro, que el porcentaje correspondiente a Innofar, se retiene con la finalidad de pagar la deuda por el reconocida, en favor de la sociedad PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

AL HECHO 55: Es completamente falso.

En primera medida, se reitera que nunca existió ningún contrato de agencia comercial entre las partes.

En segunda medida, es claro a todas luces que la relación comercial suscita entre las partes, se determina en la medida de un contrato de colaboración empresarial, y no ningún tipo o especie de agencia comercial, y en este sentido, el inciso segundo de la Cláusula Décima Tercera del contrato suscrito establece que:

"(...) Las Partes carecen de facultad para representar judicial o extrajudicialmente a la otra Parte, por lo que se obligan a dar a conocer a los terceros dicha circunstancia.

Así las cosas, ninguna de las Partes es agente comercial, apoderado, mandatario o promotor, ni está autorizado para actuar en nombre y representación de la otra parte, ni obligarlo frente a terceros bajo ninguna circunstancia. El presente Contrato no confiere a ninguna de las Partes ningún tipo de licencia de marcas, nombres o servicios respecto de la otra (...)"negrilla y subrayado propio.

Nuevamente llamamos la atención a la bilateralidad en la elaboración del acuerdo en mención, por lo cual ahora resulta en una falsedad del Demandante argüir o pretender cualquier tipo de agencia comercial.

AL HECHO 56: No me consta.

AL HECHO 57: Es Falso, al igual que se determina en las respuestas anteriormente determinadas, el demandante recae en comportamientos de mala fe, deslealtad comercial e intención de engañar al señor Juez, al negar su elemento participativo en la relación comercial en mención, aun cuando de la simple lectura de los determinados acuerdos, contratos y demás actos jurídicos, se evidencia la igualdad jurídica y participación mancomunada de cada una de las partes.

Además de lo anterior, se establece que la terminación de la relación contractual entre Innofar y PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A, se justifica en el incumplimiento de Innofar en el pago de las deudas en favor de Praxis, que a la fecha de ascendían a la totalidad de: **CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON SETENTA Y**

NUEVE CENTAVOS de los Estados Unidos de América (**USD \$4,795,227.79**), causando así graves perjuicios a la compañía española.

Por último, manifestamos al señor Juez que, la sociedad **INNOFAR** adeuda a mi Poderdante, según lo registrado en el balance de situación, a corte del 30 de noviembre de 2019 la totalidad de USD. (\$1.131.764,27), equivalentes a (1.039.364,74 euros).

AL HECHO 58: Es completamente falso.

● En primera medida, se reitera que nunca existió ningún contrato de agencia comercial entre las partes.

Además de lo anterior, se establece que la terminación de la relación contractual entre INNOFAR y PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A, se justifica en el incumplimiento de INNOFAR en el pago de las deudas en favor de Praxis, que a la fecha de ascendían a la totalidad de:

● **CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS** de los Estados Unidos de América (**USD \$4,795,227.79**), causando así graves perjuicios a la compañía española.

Manifestamos al señor Juez que, la sociedad **INNOFAR** adeuda a mi Poderdante, según lo registrado en el balance de situación, a corte del 30 de noviembre de 2019 la totalidad de USD. (\$1.131.764,27), equivalentes a (1.039.364,74 euros).

AL HECHO 59: No es un hecho, y no me consta.

AL HECHO 60: No es un hecho, es un juicio de valor y concomitantemente una pretensión.

AL HECHO 61: No es un hecho, es un juicio de valor y concomitantemente una pretensión y es falso.

AL HECHO 62: No es un hecho, es un juicio de valor y concomitantemente una pretensión.

Se insiste en que no se suscribió entre las partes un contrato de Agencia, por lo que resulta irrisorio que se exija cualquier tipo de solidaridad.

AL HECHO 63: Es cierto.

AL HECHO 64: No es un hecho, es un juicio de valor y concomitantemente una pretensión violatoria el debido proceso jurisdiccional.

Se reitera que nunca existió ningún contrato de agencia comercial entre las partes, y en todo caso, tendría que ser un Juez del Reino de España quien juzgue la existencia o no de un contrato de agencia comercial, puesto que, en virtud del principio de autonomía de la voluntad privada, y con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, la competencia recae en dicho tribunal y no en la justicia colombiana.

Si se dispusiese, tal y como lo indica el demandante, que la competencia recae en un Juez colombiano, por el motivo de tratarse de una agencia comercial, estaríamos ante una clara y evidente

violación al debido proceso, en la medida que se determinaría un prejuzgamiento, para dar cabida a la competencia colombiana.

2. PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE LAS PRETENSIONES:

A LA PRETENSIÓN 1: **Me opongo**, debido a que entre la compañía española PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A. e INNOFAR S. A. celebraron con total autonomía, y sin vicio del consentimiento alguno *CONTRATO PARA LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING EN COLOMBIA DEL MEDICAMENTO EIPROT*. Máxime cuando INNOFAR S.A. no actuaba por cuenta ajena ni con el fin de promover y explotar de manera exclusiva los negocios de PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.

Lo anterior resulta más evidente al observar las pruebas que aporta la demandante, las cuales no logran acreditar los elementos que componen un contrato de agencia comercial.

A LA PRETENSIÓN 2: **Me opongo**, debido a que como se ha insistido, no existe contrato de agencia entre las partes, ni mucho menos una solidaridad como suspicazmente pretende hacer valer la demandante deshonrando así el acuerdo que celebraron voluntariamente. Por lo cual no procede pago por ningún concepto.

Más aun cuando la terminación de la relación contractual entre INNOFAR y PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A, se justifica en el incumplimiento de INNOFAR en el pago de las deudas en favor de Praxis, que a la fecha de ascendían a la totalidad de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

VEINTISIETE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS de los Estados Unidos de América (USD \$4,795,227.79), causando así graves perjuicios a la compañía española.

A LA PRETENSIÓN 3: Me opongo, debido a que como se ha insistido, no existe contrato de agencia entre las partes, ni mucho menos una solidaridad como suspicazmente pretende hacer valer la demandante deshonrando así el acuerdo que celebraron voluntariamente. Por lo cual no procede pago por ningún concepto.

Más aun cuando la terminación de la relación contractual entre INNOFAR y PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A, se justifica en el incumplimiento de INNOFAR en el pago de las deudas en favor de Praxis, que a la fecha de ascendían a la totalidad de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS de los Estados Unidos de América (USD \$4,795,227.79), causando así graves perjuicios a la compañía española.

A LA PRETENSIÓN 4: Me atengo a lo que ordene el despacho, pero además aclaro que, dicha documental pudo ser solicitada por la demandante ante autoridad de registro y control de comercio en España. Al ser una documental de público acceso, por lo que se ve con extrañeza la decidía de la demandante en obtener dicho documental y así acreditar la calidad de las presuntas partes.

A LA PRETENSIÓN 5: Me opongo, debido a que como se ha insistido, no existe contrato de agencia entre las partes, ni mucho menos una solidaridad como suspicazmente pretende hacer valer la demandante deshonrando así el acuerdo que celebraron voluntariamente. Por lo cual no procede pago por ningún concepto.

Más aun cuando la terminación de la relación contractual entre INNOFAR y PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A, se justifica en el incumplimiento de INNOFAR en el pago de las deudas en favor de Praxis, que a la fecha de ascendían a la totalidad de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE DÓLARES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS de los Estados Unidos de América (USD \$4,795,227.79), causando así graves perjuicios a la compañía española.

3. EXCEPCIONES DE MERITO

3.1. DE LA INEXISTENCIA DEL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL POR LA REAL EXISTENCIA DE UN CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL.

Dado el objetivo de las pretensiones de la sociedad demandante, resulta imperante en primera oportunidad hacer mención a la presente excepción. Ya que la accionante maliciosamente pretende acreditar el reconocimiento de un contrato de agencia³ cuando las partes celebraron y ejecutaron en la realidad un contrato de distribución⁴.

³ En sentencia expedida bajo número SC13208-2015, de Radicación No. 11001-31-03-014-2004-00027-01, la corte señaló: "*En el caso de la agencia comercial, es, indudablemente, su objeto lo que constituye su razón de ser, su identidad propia. Se celebra, en efecto, con el encargo de «promover o explotar negocios en un ramo determinado y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional», como «representante o agente» de un empresario nacional o extranjero, o como fabricante o distribuidor de uno o varios de sus productos, acorde con lo estatuido por el artículo 1317 del Código de Comercio.*"

⁴ En sentencia expedida bajo, numero SC13208-2015, de Radicación No.

Así, nos remitiremos a la jurisprudencia de la honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala Civil y a la doctrina a fin de esclarecer la diferencia entre uno y otro contrato, más aún cuando el contrato de distribución comercial es un contrato innominado, así como sin regulación expresa.

Sea lo primero mencionar que para predicar la existencia de un contrato de agencia comercial deben estar presentes todos y cada uno de los elementos que enmarcan su materialización a la luz de la normativa comercial vigente⁵.

Al respecto la mencionada corporación señaló en sentencia SC3645 del 9 de septiembre de 2019 que:

"Los elementos estructurales de la agencia comercial, esto es, la «independencia» y «estabilidad» de la precursora; el «encargo de promover o explotar negocios»; la «actuación del agente por cuenta del empresario y una remuneración a favor del agente»." (Negrilla y subrayado fuera de texto)

11001-31-03-014-2004-00027-01, la corte señaló: "El de distribución, es un convenio que otorga al comercializador el derecho de **vender los productos del empresario en una zona geográfica determinada bajo las condiciones impuestas por este, obteniendo como ganancia la diferencia entre el precio de compra al productor y el de venta al cliente final, denominada margen de reventa.**"

⁵ La sentencia SC3645 del 9 de septiembre de 2019 señala: "Existiendo una clara regulación del contrato de agencia en los artículos 1317 al 1331 del Código de Comercio, cuando se pide su declaración o la prevalencia frente a cualquier otro nexo presunto, es imprescindible que confluayan todos los presupuestos necesarios para su conformación, pues, de faltar uno solo no tiene cabida acceder a tales reclamos, por corresponder a otro tipo de relación."

En la misma providencia la Corte Señalo que,

*"«[e]n el lenguaje jurídico actual, solo puede entenderse como agente (...) al comerciante que dirige su propia organización, sin subordinación o dependencia de otro (...). Explica, según en otra ocasión se señaló, «(...) la exigencia de la estabilidad de la relación contractual, así como la **independencia o autonomía del agente**, que, con su propia organización, desempeña una actividad encaminada a conquistar clientela, conservar la existente, ampliar o reconquistar un mercado, en beneficio de otro comerciante, que le ha encargado (...) el desempeño de esa labor." (Negrilla y subrayado fuera de texto)*

Así, resulta notorio que de faltar si quiera uno de los elementos descritos no es posible hablar de un contrato de agencia, siendo el principal elemento diferenciador respecto de otros contactos comerciales el promover **exclusivamente** operaciones o actos de comercio, como intermediario independiente, **sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo** de tales operaciones.

Esta Corporación en reciente fallo de 24 de julio de 2012, exp.1998-21524-01, precisó que lo que caracteriza a esta clase de vínculos es:

a.-) "Que como su objeto es "promover o explotar negocios" del agenciado, **implica un trabajo de intermediación entre este último y los consumidores**, orientado a conquistar, conservar,

ampliar o recuperar clientela para aquel. Así mismo, que como la actividad se ejecuta en favor de quien confiere el encargo, actuando el agente por cuenta ajena, recibe en contraprestación una remuneración dependiendo, en principio, de los negocios celebrados.

b.-) Que los efectos económicos de esa gestión repercuten directamente en el patrimonio del agenciado, viéndose favorecido o afectado por los resultados que arroje; además de que la clientela pasa a ser suya, pues, la labor es de enlace únicamente.

c.-) Que existe independencia y autonomía del agente, por ser ajeno a la estructura organizacional del empresario, sin que ello impida que éste le imparta ciertas instrucciones para el cumplimiento de la labor encomendada, al tenor del artículo 1321 ibidem.

d.-) Que tiene un ánimo de estabilidad o permanencia, en la medida que se refiere a la promoción continua del negocio del agenciado y no a un asunto en particular, lo que excluye de entrada los encargos esporádicos y ocasionales

e.-) Que el compromiso debe cumplirse en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional." (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Después de señalar sus elementos la Corte en la misma providencia manifestó:

"De los anteriores condicionamientos cobra relevancia el que la actuación del agente es por cuenta ajena, en vista de que el impacto del éxito o fracaso de la encomienda se patentiza primordialmente en los estados financieros del agenciado, mientras que por sus labores de conexión aquel recibe una remuneración preestablecida.

Ese aspecto aleja a la agencia comercial sustancialmente de los vínculos en que el intermediario adquiere los productos para la reventa, en los cuales éste, en uso de sus habilidades, saca provecho de la diferencia de precios de compra y enajenación, corriendo los riesgos de cartera propios de quien ejerce actividades de comercio."(Negrilla y subrayado fuera de texto)

Seguidamente la corporación hace énfasis en la **autonomía** como elemento diferenciador respecto otros contratos, además de insistir en la imperante necesidad de que confluyan todos los elementos taxativos del contrato de agencia, así:

"Al respecto la Corte precisó que "no obstante la autonomía de que goza la agencia, la característica mercantil intermediadora, lo hace afín con otros contratos, con los cuales puede concurrir, pero sin confundirse con ninguno de ellos, ya que tiene calidades específicas que, por lo mismo, lo hacen diferente, razón por la cual, su demostración tendrá que ser inequívoca. (...)

Los requisitos mencionados para la configuración del

*indicado acuerdo de voluntades son concurrentes, esto es, deben aparecer todos para que puede predicarse válidamente su configuración, **ya que la falta de uno de o varios de ellos implica necesaria y fatalmente que tal convención no existe o que degenera en otro acuerdo de naturaleza diferente**". (Negrilla y subrayado fuera de texto)*

*No sobra reiterar que **la independencia y autonomía son uno de los presupuestos necesarios en esta clase de vínculos, lo que conlleva la inexistencia de lazos de subordinación o dependencia entre agente y agenciado**, que de presentarse desencadenarían en relaciones de índole laboral y lo alejarían de los acuerdos mercantiles a que corresponde". (Negrilla y subrayado fuera de texto)*

Resultando necesario que, quien pretenda demostrar la agencia comercial acredite que:

- Actuó con el fin de promover y explotar de manera exclusiva los negocios de la presunta empresa agenciada.
- El beneficio del negocio redundó preponderantemente en la presunta empresa agenciada y no del supuesto agente.
- El promover y explotar de manera exclusiva los negocios de la presunta empresa agenciada en nombre del empresario al ser el presunto agente un mero intermediario.

- Obtuvo ganancia representada en un beneficio o margen comercial, no en una comisión.

Ahora bien, haciendo énfasis en las distinciones de los contratos de agencia y de distribución, la Corte suprema de justicia en providencia emitida en ponencia del magistrado LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA de número SC3645-2019 y de radicación: 15001-31-03-001-2009-00236-01 aseveró que:

*"Cuando un comerciante difunde un producto comprado para el mismo revenderlo, o, en su caso, promueve la búsqueda de clientes a quienes revenderles los objetos que se distribuyen, lo hace para promover y explotar un negocio que le es propio, o sea, el de la reventa mencionada; **pero tal actividad no obedece, ni tiene la intención de promover o explotar negocios por cuenta del empresario que le suministra los bienes, aunque, sin lugar a dudas, este último se beneficie de la llegada del producto al consumidor final (...).***

Un simple distribuidor, al actuar en causa propia, es distinto del agente, porque debe asumir todas las contingencias de la operación, por ejemplo, la pérdida o el deterioro de las mercancías, el no pago de ellas, la insolvencia o iliquidez de los clientes, o la inestabilidad de los precios en el mercado.

La contraprestación de la actividad es otro de los elementos que distancian al revendedor en una agencia, pues los distribuidores no la derivan del empresario, sino que, por sí, la amasan y construyen,

sacando provecho de la diferencia de precios entre las operaciones de compra y de reventa.

Igual que en la agencia, la simple distribución tampoco excluye la intervención de los empresarios en actividades de cooperación, como publicidad (avisos en locales, camisetas, regalos, etc.), y mercadeo (incentivos, garantías, en fin), entre otras; o en materia de restricciones, imponiéndolas, verbi gratia, para salvaguardar la notoriedad de la marca o del producto y los demás derechos materiales e intangibles comprometidos en la distribución." (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Así, un agente promueve y concluye la venta de las mercancías en nombre de un tercero⁶ a cambio de una comisión, mientras que, un distribuidor es el que compra y revende los productos del fabricante por cuenta y en nombre propio, así como la ganancia aparece representada en un beneficio o margen comercial.

Resulta trascendental señalar que para la distinción entre los contratos "la distribución de riesgos se muestra como un elemento definitorio, que, sin estar expresa en la definición, es producto de

⁶ La actuación a nombre y por cuenta de un tercero, ha sido destacada en la jurisprudencia de esta Sala como la característica de mayor relevancia cuando se trata de determinar si el contrato que vincula a las partes de una litis es de agencia mercantil. (...)

(...) Si el agente promociona o explota negocios que redundan en favor del empresario, significa que actúa por cuenta ajena, de modo que las actividades económicas que realiza en ejercicio del encargo repercuten directamente en el patrimonio de aquél, quien, subsecuentemente, hace suyas las consecuencias benéficas o adversas que se generen en tales operaciones.

*ella y permite identificar una actividad propia a la función práctica, económica y social de la agencia comercial. Con todo, la coexistencia de contratos puede redistribuir los riesgos del mercado y dejar como elemento definitorio la promoción por cuenta de, permitiéndonos identificar de mejor manera cuándo estamos en presencia de un contrato de agencia comercial y cuándo se trata de un negocio jurídico distinto (...)."*⁷

Ello teniendo en cuenta que "el agente, no asume esas contingencias porque realiza su actividad profesional para el dominus negotii, de ahí que el vínculo **jurídico se establece directamente entre el comitente y el cliente, pues el agente es solo un intermediario**"⁸.

En un mismo sentido la corporación en providencia No. SC13208-2015 de radicación No. 11001-31-03-014-2004-00027-01 afirmó que:

"Luego, al intermediario que obra por su cuenta no puede considerarse agente comercial, es decir, a quien toma para sí los riesgos de las operaciones comerciales que realice, como ocurre en aquellos vínculos contractuales en virtud de los cuales se adquieren los productos para su reventa, obteniéndose un provecho económico de la diferencia de precios de

⁷JAIME ALBERTO MENDIETA PINEDA. DISTRIBUCION DEL RIESGO EN EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL. REVIST@ e – Mercatoria Volumen 5, Número 1 (2006). DISTRIBUCION DEL RIESGO EN EL CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL.

⁸ CSJ, S. Civil, Rad. 11001-31-03-014-2004-00027-01, sep. 30/15, M. P. Ariel Salazar Ramírez. Las notas al pie son de la sentencia.

compra y enajenación, y asumiéndose, además, las contingencias de pérdida y deterioro de las mercancías, solvencia de los clientes y pago de los productos.

En resumen, como elementos diferenciadores de las figuras del agente y del distribuidor, se resaltan las siguientes:

- a) Aunque ambos se encuentran integrados en la red de comercialización del empresario, desde el punto de vista económico, en tanto la inversión del agente, por lo general, está relacionada con la organización de su empresa, **la del distribuidor se extiende a la compra de productos al fabricante para revenderlos.**
- b) El agente recibe una remuneración del empresario; en cambio, el distribuidor obtiene **las ganancias del margen comercial de la reventa.**
- c) En su relación con los clientes, **el distribuidor actúa en su nombre y por cuenta propia, por lo que debe correr con el riesgo y la suerte de las ventas que realice;** el agente, no asume esas contingencias porque realiza su actividad profesional para el dominus negotii, de ahí que el vínculo jurídico se establece directamente entre el comitente y el cliente, pues el agente es solo un intermediario.”
(Negrilla y subrayado fuera de texto)

En la misma sentencia la corporación también precisa que:

"sí una de las características de la agencia es que «la actuación del agente es por cuenta ajena, en vista de que el impacto del éxito o fracaso de la encomienda se patentiza primordialmente en los estados financieros del agenciado», ese aspecto la distancia «sustancialmente de los vínculos en que el intermediario adquiere los productos para la reventa, en los cuales éste, en uso de sus habilidades, saca provecho de la diferencia de precios de compra y enajenación, corriendo los riesgos de cartera propios de quien ejerce actividades de comercio»".(Negrilla y subrayado fuera de texto)

Tan solo basta con mirar la realidad en la que se materializó la relación Comercial entre las aquí partes para evidenciar que NO se presentan los elementos descritos por la corte, llegando al inminente corolario de que NO se estuvo frente a un contrato de Agencia Comercial.

Como ya se ha señalado en la presente contención, en el caso no se suscribió ni materializo un contrato de Agencia Comercial, caso distinto se celebró y ejecuto entre las partes un contrato de Distribución.

De la ejecución del contrato de distribución automáticamente desfigura:

A) La actuación del agente por cuenta del empresario, ello por cuanto el demandante como distribuidor fue el que compro y revendió el producto de mi poderdante por cuenta y en nombre

propio, como se evidencia en las pruebas aportadas por la misma demandante: 1) Las facturas de venta que realiza INNOFAR a sus clientes, donde se desvirtúa representación o intermediación entre las partes 2) El preacuerdo para la distribución, comercialización, y marketing en Colombia. 3) El acuerdo de pago. 4) Las relaciones de compra y de venta. 5) El contrato para la distribución, comercialización, y marketing en Colombia el cual tuvo como objeto:

"OBJETO. - *PRAXIS concede a INNOFAR la licencia para la distribución, comercialización y marketing del producto EIPROT® en el país de Colombia. En tal sentido INNOFAR procederá a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EIPROT® en régimen de exclusividad, dentro de los límites territoriales de Colombia, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, y con pleno respeto a las leyes locales de Colombia, y cualesquiera otras normas y regulaciones que INNOFAR acepta la designación de DISTRIBUIDOR en las condiciones establecidas en el presente documento, manifestando que cuenta con todos los permisos legales necesarios para llevar a cabo el encargo asumido, sin que exista limitación ni reserva alguna que le impida distribuir el producto EIPROT®, cuya distribución ahora se concede, liberando por tanto a PRAXIS de cualquier responsabilidad o reclamación con respecto a la distribución, comercialización, marketing y*

venta del producto EPIPROT®, la cual es directa e individualmente asumida por INNOFAR."

- B) La **remuneración a favor del agente**, toda vez que la ganancia se vio representada por el denominado beneficio o margen comercial, es decir no existió comisión o remuneración alguna, como se evidencia en las relaciones de compra y de venta, así como, en las respectivas facturas.
- C) El **encargo de promover o explotar negocios**, ya que tal como se pactó entre las partes **distribuir, comercializar y vender el producto EPIPROT⁹**.
- D) La **independencia**, ya que accionante como distribuidor no podía organizar su actividad profesional conforme a sus propios criterios, al estar sometido a obligaciones preestablecidas en el contrato de distribución la cuales fueron objeto de acuerdo.

Resulta evidente que no se puede predicar la existencia de un contrato de agencia cuando se ausentan tres de sus elementos *sine qua non* que permitiría acreditar su eventual existencia jurídica.

⁹"PRAXIS asume el compromiso de realizar sus mejores esfuerzos para la negociación y firma de un contrato de distribución y por el cual se le concederá a INNOFAR una licencia para **distribuir, comercializar y vender el producto EPIPROT** en Colombia, de acuerdo a las condiciones que se establezcan en el contrato y respetando las leyes locales y regulaciones aplicables".

En gracia de dicción, es menester recordar que de conformidad con el artículo 1622 del Código Civil, un contrato debe ser interpretado por la "**aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes**", ejecución de la cual queda rastro en los documentos contables. De modo que, toda vez que la contabilidad de las partes NO refleja el pago de comisiones¹⁰ si no el beneficio de la reventa.

Todo concluye que la Acciónate NO logra acreditar la supuesta existencia de un contrato de agencia, sino que, por el contrario, las pruebas por ella aportada dan cuenta que: I) Actuaba como distribuidora directa, y no como un mero intermediario que al menos pudiera generar suspicacia sobre existencia de una agencia comercial. II) En su actuar comercial no promovía ni explotaba de manera exclusiva los negocios de mi poderdante.

3.3. DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD.

De manera reiterada, la insigne Corte Constitucional en diverso fallos como en la Sentencia C-934 de 2013, se ha manifestado pronunciándose acerca de la garantía de las libertades individuales como uno de los pilares del Estado social de derecho (preámbulo y artículo 13 Const.), que a su vez se proyecta hacia el libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás y el orden jurídico (art. 16 ib.), lo cual se aúna en lo que la doctrina universal y el derecho privado denominan "*autonomía de la voluntad privada*".

¹⁰ Entendidos como "**valores recibidos o pagados por la intermediación en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, las cuales deben ser reconocidas como ingresos o gastos según sea la naturaleza**". (Concejo Técnico de la Contaduría Pública, Concepto de oct. 22/15:)

En la mencionada jurisprudencia la Corte la definió a la autonomía de la voluntad privada como: "*La facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación.*" (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Es de dicho principio, donde cobra total trascendencia lo pactado en un contrato o a la hora de celebrar cualquier negocio jurídico, ya que lo que acuerdan las partes en el marco de la autonomía de la libertad se convierte en vinculante para las mismas, imposibilitando su desconocimiento de las obligaciones pactadas.

Así, el contrato al ser un acuerdo creador de relaciones jurídicas entre personas, constituye un medio de realización social para intereses privados. Según Rivera¹¹ el negocio jurídico, obra de la voluntad del hombre, con finalidad jurídica, aparece como la expresión técnica del reconocimiento de la autonomía privada, como fuente creadora de efectos jurídicos.

Entre todos los hechos o actos jurídicos generadores de obligaciones, el contrato es, indudablemente, aquel en el que la voluntad de los particulares cumple una función más importante ya que su elemento característico, es el **consentimiento**, o sea el acuerdo libre de la voluntad de las partes.

La autonomía privada en sentido amplio, está conformada por dos partes: primeramente, por el poder atribuido a la voluntad respecto de la **creación, modificación y extinción de las relaciones**

¹¹ Rivera, J. (2004). *Instituciones de Derecho Civil*. Buenos Aires: Editorial Abeledo Perrot.

jurídicas, y en segundo lugar por el poder de esa voluntad referido al uso, goce, y disposición de poderes, facultades y derechos subjetivos. Los que se concretan en torno de las figuras más típicas. La primera, considerada también como autonomía privada en sentido estricto, referida a la esfera del negocio jurídico. La segunda, concretada en el ámbito del ejercicio de los derechos subjetivos.¹²

Por lo que, la autonomía de la voluntad sólo tiene como contenido el ser **creadora de relaciones jurídicas concretas y reconocidas por el Derecho**, ya que este poder individual que se le reconoce al individuo por el ordenamiento jurídico tiene como esfera de eficacia su propia autonomía, por lo que no implica la creación de normas jurídicas de regulación social. Entonces, la autonomía privada es un poder de creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas, y es aquí donde se concretiza la autonomía privada.

En otros términos, la autonomía de la voluntad se ejercita mediante la constitución o no de relaciones jurídicas, es decir, a través de actos o negocios jurídicos. Por otro lado, este principio no solo se concreta en crear, modificar o extinguir una relación jurídica, sino que también posibilita determinar el contenido de la misma, es decir, establecer los derechos, obligaciones, deberes y objetos, lo que supone precisar el contenido del negocio jurídico que se celebra.

De esta **forma el principio de autonomía privada se manifiesta en el contrato, en la posibilidad hecha realidad en los ordenamientos jurídicos que lo reconocen de decidir, los sujetos, concertar o no un contrato, en virtud de lo cual las partes pueden crear libremente todas las relaciones jurídicas que entre ellas consideren pertinentes.**

¹² Pérez Gallardo, L. (2004). *Introducción al Derecho Civil*. La Habana: Editorial Félix Varela.

Además, nadie puede ser obligado a contratar contra su voluntad; no hay obligación de ofrecer y quien recibe una oferta puede a su arbitrio aceptarla o rechazarla, y si opta por este último camino, ello no le acarrea responsabilidad de ninguna especie, ya que es su opción la de contratar o abstenerse de hacerlo y de seleccionar con quien lo hace.¹³

Otra de las consecuencias de este principio es la libertad **de elegir el tipo contractual**, que se manifiesta además en la posibilidad de discutir el contenido del contrato. La voluntad de las partes es la que determina el contenido del contrato, de manera que su interpretación se atiende fundamentalmente a su intención. Las partes son libres también para atribuir a los contratos celebrados los **efectos que consideren pertinentes**, ya que las reglas del legislador son, en general, meramente supletorias de su voluntad. En virtud de este principio las partes pueden también elegir **la forma en que se debe constituir el contrato**, y tienen igualmente independencia para establecer el objeto del contrato y de suprimirlo o modificarlo.¹⁴

¹³ Delgado Vergara, T. (2003). *El negocio jurídico contractual*. La Habana: Editorial Félix Varela.

¹⁴ Delgado Vergara, T. (2003). *El negocio jurídico contractual*. La Habana: Editorial Félix Varela.

Katuska Hernández Fraga, Profesora de las asignaturas de Derecho sobre Bienes y Derecho de Contratos, Universidad de Cienfuegos y Danay Guerra Cosme Jueza del Tribunal Municipal de Cienfuegos. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONTRACTUAL CIVIL. SUS LÍMITES Y LIMITACIONES. *Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa*.

Al respecto, esta corporación lo ratifica en la sentencia C-341 de mayo 3 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería así:

"Dentro de este cuadro, la autonomía permite a los particulares: I) celebrar contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad; II) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; III) crear relaciones obligatorias entre sí, las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel.

*(...) De tal manera, la concepción actual de la autonomía de la voluntad privada parte del **"poder dispositivo individual", regulado por la intervención del Estado en el deber de garantizar los fines sociales que le han sido encomendados** (art. 2º Const.), de forma que la libertad de contratar, la protección y promoción individual y los derechos constituidos, deben acompasarse en función del interés público." (Negrilla y subrayado fuera de texto)*

En virtud del decantado principio, se debe otorgar prelación al contrato escrito al ser ley para las partes¹⁵, por lo que se presume

¹⁵ Código Civil, Artículo 1602: **"Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su**

que su texto es fiel reflejo de la voluntad de las aquí partes, salvo que exista evidencia de una voluntad contraria a la que las partes plasmaron por escrito. No basta, entonces, con la simple afirmación maliciosa del demandante según la cual, las partes convinieron un contrato de distribución, pero anhelaban uno de agencia. Máxime cuando durante la vigencia del contrato jamás se alegó dicha situación.

Así, su señoría solcito prestar especial atención a la tipología contractual escogida por las partes, tipología esta que va en armonía con las cláusulas contractuales en las que se infiere con simpleza que: i) se excluyen la existencia de una agencia comercial u otra forma de mandato; ii) se prohíben la representación de la contraparte como agente o mandatario; iii) se está en ausencia de una obligación expresa de promover o explotar negocios en un determinado ramo, como representante o agente de un empresario; iv) se pactó la exclusión de modificaciones consensuales al contrato salvo acuerdo escrito.

Aspecto que se ve reflejado en diversas cláusulas como lo son:

A) ESTIPULACIÓN PRIMERA:

*"OBJETO. - PRAXIS concede a INNOFAR **la licencia para la distribución, comercialización y marketing del producto EPIPROT®** en el país de Colombia. En tal sentido INNOFAR procederá a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EPIPROT® en régimen de exclusividad, dentro de los límites territoriales de Colombia, **de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, y con***

consentimiento mutuo o por causas legales."

pleno respeto a las leyes locales de Colombia,
y cualesquiera otras normas y regulaciones
que INNOFAR acepta la designación de
DISTRIBUIDOR en las condiciones
establecidas en el presente documento,
manifestando que cuenta con todos los
permisos legales necesarios para llevar a
cabo el encargo asumido, sin que exista
limitación ni reserva alguna que le impida
distribuir el producto EPIPROT®, cuya
distribución ahora se concede, liberando por tanto a
PRAXIS de cualquier responsabilidad o reclamación
con respecto a la distribución, comercialización,
marketing y venta del producto EPIPROT®, la cual
es directa e individualmente asumida por
INNOFAR."

(Negrilla y subrayado fuera de texto)

B) ESTIPULACIÓN SEGUNDA:

"- *Exclusividad.* – PRAXIS conviene en conceder al
DISTRIBUIDOR una exclusividad limitada al territorio
del estado de Colombia, con la siguiente regulación:

1.- La exclusividad impone al DISTRIBUIDOR:

- La obligación de comprar el producto
EPIPROT® únicamente a PRAXIS. (Compra
exclusiva), sin que pueda comprar dicho producto
de otro suministrador diferente." (Negrilla y
subrayado fuera de texto)

C) ESTIPULACIÓN TERCERA:

"- Duración. - (...)

3.2.- Llegado su vencimiento, el contrato podrá ser renovado por sucesivos períodos de dos años, siempre que se hayan cumplido los objetivos de ventas recogidos en el presente contrato (o en los sucesivos acuerdos de prórroga), y siempre que las partes lleguen a un acuerdo sobre los nuevos objetivos y precios a aplicar en los años sucesivos.

De no llegar las partes a un acuerdo antes de la finalización del contrato, éste quedará resuelto sin que se produzca la prórroga establecida en el párrafo anterior. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

D) ESTIPULACIÓN CUARTA:

"- Compromiso y pedidos. -

1.- El DISTRIBUIDOR se obliga a llevar a cabo las labores de **distribución, comercialización y venta** del producto EIPROT® en Colombia, llevando a cabo y a su costa toda la publicidad y marketing del producto.

(...)" (Negrilla y subrayado fuera de texto).

3.4. DE LA MALA FÉ:

Me permito poner de manifiesto al señor Juez, acerca de las acciones y declaraciones ilegítimas, mentirosas e irresponsables realizadas por el demandante, en detrimento de la verdad fáctica y procesal, y encaminadas en hacer recaer en error al señor Juez, demostrándose así una clara mala fe de la parte demandante en el presente proceso jurisdiccional.

En primera medida, se puntualizará las conductas más relevantes realizadas por el demandante constitutivas de mala fe, para luego realizar una recopilación de los postulados constitucionales, legales y jurisprudenciales acaecidos en relación con la buena fe procesal. Para así partir de un estándar conductual de las actuaciones desleales y fraudulentas del Demandante.

Es así como, en el caso de marras se logra evidenciar una actuar malicioso y doloso por parte de la accionante por cuanto:

- A)** El demandante afirmó desconocer, bajo gravedad de juramento, el dominio de mi poderdante aun cuando en el Contrato allegado por el Accionante en la demanda, se evidencia una clara relación de la dirección de notificación correspondiente a la sociedad PRAXIS PHARMACEUTICAL. S.A.

Además de lo anterior, contrario a lo manifestado (y juramentado) por el accionante tanto en la demanda como en la subsanación, el Demandante contaba, además del contrato, con facturas de venta (las cuales igualmente fueron aportadas por el demandante), en la cuales se logra evidenciar que conocían la dirección **-PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLABA, C/HERMANOS LUMIERE 5, 01510 MIÑANO MAYOR (ÁLAVA)-** correspondiente a la sociedad PRAXIS

PHARMACEUTICAL. S.A. (España). Por lo anterior, el desconocimiento de la dirección de notificación de la sociedad en mención resulta, a todas luces, en una posibilidad irrisoria, teniendo en cuenta la prolongada relación comercial que sostuvo PRAXIS PHARMACEUTICAL. S.A. (España) con INNOFAR S.A.

Es así pues que, se determina la mala fe del demandante, en el sentido de realizar una serie de afirmaciones que no corresponden a la realidad, Máxime cuando se determinaron "bajo gravedad de juramento", por lo cual solicitamos al señor Juez pronunciarse acerca de la gravedad de la conducta evidenciada, aplicando las sanciones a las que haya lugar.

B) La parte demandante pretende, de mala fe, darle un alcance erróneo al *CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING DEL PRODUCTO EPIPROT®*, pretendiendo acreditar la supuesta existencia de un contrato de AGENCIA COMERCIAL.

Con lo hasta aquí expuesto, resulta notoria la inexistencia de un contrato de agencia, cuando fue desde un inicio la intención de las partes suscribir uno de Distribución, contrato que suscribieron las partes de manera libre y voluntaria, así como en su ejecución se desarrolló en todos sus aspectos como un contrato de distribución.

Es aquí oportuno resaltar que, la parte actora jamás presentó crítica o disgusto alguno respecto de la tipología contractual acordada en vigencia de la relación comercial, por lo que resulta irrisorio que posteriormente pretenda el cobro de

indemnizaciones y cesantías ajenas a lo acordado en el marco del principio de la autonomía de la voluntad privada, así como de la realidad comercial consecuencia del contrato de distribución.

- C) La demandante, sin vergüenza alguna, pretende la declaración de pagos irrisorios aun cuando el contrato de distribución finalizo por su incumplimiento sistemático de las obligaciones plasmadas en el mismo.

En efecto su señoría, la deuda de la accionante con mi poderdante asciende la suma de cuatro millones setecientos noventa y cinco mil doscientos veintisiete dólares (USD\$4,795,227.79).

No siendo esto suficiente, la demente acusó una supuesta renovación automática cuando su incumplimiento sistemático llevo a la finalización del contrato de Distribución. Situación que incluso estaba prevista en la cláusula tercera del mismo así:

*"(...)3.2. Llegado su vencimiento, el contrato podrá ser renovado por sucesivos períodos de dos años, **siempre que se hayan cumplido los objetivos de ventas recogidos en el presente contrato** (o en los sucesivos acuerdos de prórroga), y siempre que las partes lleguen a un acuerdo sobre los nuevos objetivos y precios a aplicar en los años sucesivos.*

De no llegar las partes a un acuerdo antes de la finalización del contrato, éste quedará resuelto sin que se produzca la prórroga establecida en el párrafo anterior." (Negrilla y subrayado fuera de texto)

D) La demanda, sin prueba alguna, afirma que mi poderdante le obligó a acceder a las imposiciones y que solo por ello suscribió documentos "leoninos".

Se insiste en que la aquí accionante no alegó o acreditó algún vicio en el consentimiento, ni al momento de suscribir el contrato, ni en su vigencia, ni con la presente demanda, por lo que sus afirmaciones son a todas luces tendenciosas, así como de mala fe; y solo pueden estar encaminadas a afectar el buen nombre de mi poderdante ocultando el hecho de su sistemático incumplimiento.

Sobre el particular el artículo 83 de la constitución política de Colombia, estipula que:

"ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."

Es así, como desde la Carta Política se realiza un llamado para que tanto los particulares como las instituciones públicas, encaminen sus actuaciones bajo los parámetros de la buena fe, lo cual en el marco del Estado Social de Derecho constitucionalmente declarado para la Republica de Colombia, resulta en un principio ético y moral, así

como un deber jurídico de los participantes en el marco de la acción social.

En desarrollo del concepto, la Jurisprudencia nacional ha determinado una amplia línea de estudio y concepción, así como de los límites, presupuestos y operancia del principio de Buena fe, es así como mediante la **Sentencia No. C-544/94** de la Honorable Corte Constitucional, con M.P. JORGE ARANGO MEJIA, se estableció que:

"La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionada por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte, es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, a primera vista, el artículo transcrito parecería inútil. ¿Por qué se incluyó en la Constitución? La explicación es sencilla: se quiso proteger al particular de los obstáculos y trabas que las autoridades públicas, y los particulares que ejercen funciones públicas,

ponen frente a él, como si se presumiera su mala fe, y no su buena fe. En la exposición de motivos de la norma originalmente propuesta, se escribió:

"La buena fe, como principio general que es, no requiere consagración normativa, pero se hace aquí explícita su presunción respecto de los particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario de una actividad de servicio. Este mandato, que por evidente parecería innecesario, estaría orientado a combatir ese mundo absurdo de la burocracia, en el cual se invierten los principios y en el cual, para poner un ejemplo, no basta con la presencia física del interesado para recibir una pensión, sino que es necesario un certificado de autoridad que acredite su supervivencia, el cual, en ocasiones, tiene mayor valor que la presentación personal".
(Gaceta Constitucional No. 19. Ponentes: Dr. Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Potocarrero. Pág. 3)

Claro resulta por qué la norma tiene dos partes: la primera, la consagración de la obligación de actuar de buena fe, obligación que se predica por igual de los particulares y de las autoridades públicas. La segunda, la reiteración de la presunción de la buena fe de los

particulares en todas las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas.

Es, pues, una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades públicas. Naturalmente, es discutible si el hecho de consagrar en la Constitución la regla de la buena fe, contribuya a darle una vigencia mayor en la vida de relación, o disminuya la frecuencia de los comportamientos que la contrarían (...)".

3.5. DE LA INEPTITUD PROBATORIA DE LA DEMANDA.

En este acápite, nos referiremos a las deficiencias probatorias determinadas por el Demandante en el curso del presente proceso, que derivan en la imposibilidad para el establecimiento de una verdad procesal y fáctica, así como los elementos propios de la relación jurídica suscitada entre el Demandante y mi Poderdante.

En este sentido, entraremos a referirnos acerca de cada uno de los elementos de prueba solicitados¹⁶ y aportados por el demandante, con la finalidad de establecer la falta de aptitud probatoria, en relación a las pretensiones perseguidas por el demandante, con la finalidad de que el señor Juez se sirva declarar la improcedencia de las pretensiones incoadas por el Demandante.

PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS:

¹⁶ Se hace claridad que, acerca del "Juramento estimatorio" y de las pruebas testimoniales, se hablara en sus respectivos acápites de la presente contestación, por ende, limitaremos esta apreciación acerca de las pruebas documentales únicamente.

Las pruebas documentales aportadas por el demandante, resultan en, una primera medida el contrato resulta con algún grado de utilidad para establecer una relación jurídica comercial entre las partes, en la medida de versar sobre el contrato suscrito por las partes, para la distribución y comercialización del medicamento EPIPROT.

Si bien la documental aportada cumple con la carga de probar la existencia de una relación jurídica, determinada mediante un contrato de distribución marketing y colaboración, nada tiene que ver con las pretensiones de la demanda estructuradas, puesto que no se cumple la función de probar la existencia de ningún tipo de agencia comercial entre las partes, y por el contrario desvirtúa esta argumentación, por cuanto, por ejemplo, la cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del "**CONTRATO PARA LA DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y MARKETING EN COLOMBIA DEL MEDICAMENTO EPIPROT**" establece:

"VIGESIMO SEGUNDA. - Exclusiones. - Nada de lo aquí contenido se considerará en modo alguno constitutivo de asociación, agencia, unión temporal de empresas entre las partes contratantes, ni tipo alguno de sociedad, ni contrato de cuenta en participación.

EL DISTRIBUIDOR no tiene la facultad para obligar a PRAXIS ni solidaria ni mancomunadamente". (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Como se evidencia entonces, las documentales establecidas en los numerales 1 al 4 del acápite de pruebas "documentales" en la demanda, no se determinan como pruebas útiles en relación a las

pretensiones de la demanda, que según el **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ** se refiere a:

*"(...) **La utilidad:** Se encuentra directamente relacionada con el hecho de que la prueba solicitada no se relacione con aquellas que no tienen razón de ser, sobran, pretenden probar un hecho que ya se encuentra demostrado en el proceso o que se encuentra exento de prueba.*

La prueba útil es aquella necesaria en el proceso y debe ser congruente con los hechos sobre los cuales versa el debate o el asunto sobre el cual se fundamenta el mismo, ya que pretende demostrar los hechos que son presupuesto de los efectos jurídicos que las partes persiguen, sin cuyo conocimiento el juez no puede decidir.

Frente a la necesidad de la prueba, en sentencia del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se indicó:

"La prueba judicial es un medio procesal que permite llevar al juez el convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso y, por tanto, le permite tomar una decisión fundada en una determinada realidad fáctica. 1.2. De acuerdo con el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos tramitados ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se aplicarán las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración.

En virtud del principio de la necesidad de la prueba, las pruebas aportadas a un proceso dentro de las oportunidades legalmente establecidas, deben llevar al juez al grado de convencimiento suficiente para que pueda solucionar el problema objeto de litigio.

Por ello, las pruebas deben ser pertinentes y conducentes. Conducentes, porque el medio probatorio es idóneo para demostrar el hecho que se alega; pertinentes, porque el hecho que se pretende demostrar es determinante para resolver el problema Jurídico.

Por tanto, el juez debe abstenerse de decretar pruebas superfluas, redundantes o corroborantes, cuando no sean absolutamente necesarias. Finalmente, las pruebas, además de tener las características mencionadas, deben estar permitidas por la ley."

En conclusión, la prueba conducente debe dirigirse a determinar si el medio probatorio solicitado resulta apto jurídicamente para acreditar determinado hecho. Por su parte, la pertinencia de la prueba se puede definir frente a los hechos alegados en el proceso respecto de los cuales gira verdaderamente el tema del proceso y, finalmente, la utilidad o eficacia de la prueba la constituye el efecto directo dentro del juicio que informa al juez sobre los hechos o circunstancias pertinentes y que, de alguna manera, le imprimen convicción al fallador.

Así bien, la finalidad de una prueba debe ser la de llevar al juez a la certeza o conocimiento de los hechos

jurídicamente relevantes que se narran en el proceso y soportar las pretensiones o las razones de la defensa. La Ley dispuso una serie de medios de prueba que pueden ser decretados en el curso de proceso, por tanto, le concierne al ámbito de competencia exclusiva de la respectiva autoridad judicial, la determinación acerca de la validez, aptitud, pertinencia y conducencia de las pruebas a partir de las cuales formará su convencimiento y sustentará la decisión final del litigio (...)"17.

Como se logra evidenciar en el sustento jurisprudencial anteriormente establecido, la utilidad de la prueba es un requisito indispensable para el decreto o no de las mismas, por parte del señor Juez. En este sentido, al determinarse la inutilidad en la relación de la prueba solicitada con la pretensión realizada en la demanda, no es procedente que el señor Juez decrete o valore las pruebas solicitadas, en el sentido del establecimiento de una agencia comercial entre las partes.

Ahora bien, referente a las documentales relacionadas en los numerales 6, 7 y 8, no se determinan como útiles o conducentes para el establecimiento de una relación de agencia, sino que se trata de relaciones de compra venta del producto EPIPROT, sin que ello se puede determinar como una prueba de relación de agencia, puesto que de hecho el objeto de la relación contractual entre las partes, a saber el **"CONTRATO PARA LA DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y MARKETING EN COLOMBIA DEL MEDICAMENTO EPIPROT"**.

17 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - DESPACHO No. 3 DE ORALIDAD. Magistrado Sustanciador: FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA; radicado: 1500-1333-30-01-2014-00139-02.

Si lo que quiere llegar a probar al demandante es la relación de compra del producto **EPIPROT** realizada de parte de **INNOFAR**, a la sociedad **PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A**; este hecho está ampliamente aceptado por las partes, puesto que de ello se trata la relación jurídica y comercial suscita.

Ahora bien, ninguna de las pruebas documentales, da fe de la celebración o ejecución de ningún tipo de contrato de agencia comercial o una relación similar, sino que dan fe de la práctica de la ejecución del "**CONTRATO PARA LA DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y MARKETING EN COLOMBIA DEL MEDICAMENTO EPIPROT**"

Una vez nos referimos a los documentos aportados como pruebas, además de lo propio referente a las deficiencias en el juramento estimatorio y la solicitud de pruebas testimoniales, es necesario referirnos a los medios probatorios no allegados o solicitados por el demandante, y que resultaban en eminentemente necesarios para la probanza de los hechos supuestamente acometidos, entre los cuales destacamos:

a) INFORME PERICIAL:

Si de realizar una tasación transparente y fiel de una supuesta cesantía comercial se trata, la demandante tenía la carga de acudir a los servicios de un tercero cualificado, transparente e imparcial, que realizara un estudio de los elementos económicos y contables, con la finalidad de determinar las variables y el resultado particular de la supuesta cesantía comercial, según los parámetros legales específicos en la legislación nacional vigente.

Acerca del valor probatorio de los dictámenes periciales, la Corte Constitucional, en Sentencia C-124/11(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) estableció que:

"La doctrina tradicional en materia probatoria confiere al dictamen pericial una doble condición: Es, en primer término, un instrumento para que el juez pueda comprender aspectos fácticos del asunto que, al tener carácter técnico, científico o artístico, requieren ser interpretados a través del dictamen de un experto sobre la materia de que se trate. En segundo lugar, el experticio es un medio de prueba en sí mismo considerado, puesto que permite comprobar, a través de valoraciones técnicas o científicas, hechos materia de debate en un proceso.

(...)

Este carácter dual es confirmado por autores como Silva Melero, quien sostiene que el dictamen pericial cumple una doble función. De un lado "... llevar al proceso conocimientos científicos o prácticos que el juez podría conocer, pero que no está obligado a ello, y que son precisos para adoptar la decisión." Por otro lado, el dictamen también opera como "concepto de pericia de constatación de hechos", o lo que es lo mismo "... constataciones objetivas, que pueden ser independientes la persona del inculpado." A idéntica conclusión arriba la jurisprudencia constitucional. Sobre el particular, en la sentencia T-796/06 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), se pone de presente cómo el dictamen pericial responde a una naturaleza jurídica dual. De un lado, es

comprendido como "...un verdadero medio de prueba, debido a que el dictamen pericial se dirige a provocar la convicción en un determinado sentido, esto es, la actividad que realiza el perito tiene finalidad probatoria, ya que tiende a la fijación de la certeza positiva o negativa de unos hechos.". De otro, la experticia también es comprendida como "...un mecanismo auxiliar del juez, ya que mediante el dictamen pericial no se aportan hechos distintos de los discutidos en el proceso, sino que se complementan los conocimientos necesarios para su valoración por parte del juez. Mientras los medios de prueba introducen en el proceso afirmaciones fácticas relacionadas con las afirmaciones iniciales de las partes, con interés exclusivo para el proceso concreto, la pericia introduce máximas de experiencia técnica especializadas de validez universal para cualquier tipo de proceso".

Llamamos la atención al señor Juez, acerca de la evidente carencia de una prueba pericial que resultara en tasaciones técnicas y transparentes acerca de la supuesta cesantía comercial solicitada, y contrario a ello, en la demanda el accionante se dedica a realizar tasaciones amañadas y caprichosas, según cifras económicas vacías, que no dan cuenta de elementos como gastos, costos, beneficios netos o reales, y demás factores económicos que afectan la utilidad de una compañía.

Ahora bien, es necesario establecer que, mediante el artículo 82 de Código General del proceso, se establecen los requerimientos mínimos que debe acreditar una demanda, con la finalidad que la misma sea conocida y tramitada por un Juez de la República, a saber:

"ARTÍCULO 82. REQUISITOS DE LA DEMANDA. *Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:*

1. *La designación del juez a quien se dirija.*
2. *El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).*
3. *El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.*
4. *Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.*
5. *Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
6. ***La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.***
7. *El juramento estimatorio, cuando sea necesario.*
8. *Los fundamentos de derecho.*
9. *La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.*
10. *El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.*

11. *Los demás que exija la ley*". (Negrilla y subrayado fuera de texto)

En suma, se determina el artículo 167 del Código General del Proceso, establece como obligación de cada una de las partes probar los elementos facticos que pretenden hacer valer como verdad procesal, en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares." (Negrilla y subrayado fuera de texto).

De la legislación anteriormente transcrita, es factible determinar la obligación de cada una de las partes del proceso judicial, probar los elementos facticos fundamento de sus pretensiones, con la finalidad

de obtener los supuestos de derecho base de la decisión judicial determinada por el Administrador de Justicia.

Además de lo anterior, la transversalidad del carácter probatorio determinado en una demanda, se establece como una garantía efectiva del derecho fundamental al debido proceso, consagrado mediante el artículo 29 de la constitución política de Colombia, además de diferentes estamentos nacionales e internacionales, como se determina mediante Sentencia T-460 del 15 de julio de 1992, (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), a saber:

*"La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; **la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde***

luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características". (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Es claro entonces, que el deber de aportar los elementos probatorios correspondientes o idóneos en la demanda, se constituye tanto en un deber del demandante, como en una garantía al derecho al debido proceso de la parte Demandada. Sin embargo, las pruebas que se pretendan hacer valer en el marco del proceso judicial, deben acreditar una serie de requisitos, tanto de forma como de fondo, según lo determinado mediante el artículo 164 del Código General del proceso, a saber:

"ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. *Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho".*

Es por ello que, se establece como misión del Juez, el realizar una apreciación o ponderación, lo más exacta posible de los medios de prueba, esta es una condición esencial para poder formular un fallo verdaderamente objetivo, sólido y justo, basado en pruebas positivas, que deben acreditar, entre otros a:

"En el ordenamiento jurídico colombiano, la Ley procesal impone al Juez el estudio anticipado de las pruebas antes de proceder a su ordenación o práctica en el proceso. Para ello, debe verificar que la prueba sea de aquellas

permitidas por Ley, que tenga relevancia con el tema debatido y que el hecho que se busque probar no esté suficientemente demostrado en el proceso con otros medios probatorios.

*El artículo 167 del CGP señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Así mismo, el artículo subsiguiente (168 del C.G.P.), indica que el juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles"**18**.*

b) LA FALTA DE PRUEBA RESPECTO CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE AGENCIA:

Ahora bien, si el fin pretendido en la demanda era el establecimiento de una relación de agencia, el demandante contaba con la carga de probar eficazmente, la existencia de cada uno de los elementos propios de un contrato de agencia, respecto a los cuales la Honorable Corte Suprema de Justicia señaló, mediante sentencia SC3645 del 9 de septiembre de 2019, que:

*"Los elementos estructurales de la agencia comercial, esto es, la «**independencia**» y «**estabilidad**» de la precursora; el «**encargo de promover o explotar negocios**»; la «**actuación del agente por cuenta***

18 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - DESPACHO No. 3 DE ORALIDAD. Magistrado Sustanciador: FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA; radicado: 1500-1333-30-01-2014-00139-02.

del empresario y una remuneración a favor del agente». (Negrilla y subrayado fuera de texto)

En la misma providencia la Corte Señalo que,

"«[e]n el lenguaje jurídico actual, solo puede entenderse como agente (...) al comerciante que dirige su propia organización, sin subordinación o dependencia de otro (...)». Explica, según en otra ocasión se señaló, «(...) la exigencia de la estabilidad de la relación contractual, así como la **independencia o autonomía del agente**, que, con su propia organización, desempeña una actividad encaminada a conquistar clientela, conservar la existente, ampliar o reconquistar un mercado, en beneficio de otro comerciante, que le ha encargado (...) el desempeño de esa labor." (Negrilla y subrayado fuera de texto)

En este sentido, era una obligación del Demandante realizar la efectiva probanza de, supuesto como por ejemplo que **Actuaba bajo presupuestos de independencia comercial**: El demandante debió poder probar que, contrario a lo determinado mediante el **"CONTRATO PARA LA DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y MARKETING EN COLOMBIA DEL MEDICAMENTO EIPROT"**, Innofar contaba con la facultad para comercializar el medicamento EIPROT en las condiciones de tiempo, modo y lugar que deseara, sin ningún tipo de limitación o subordinación aplicada por **PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.**

De la misma manera, la parte demandante tenía la carga de realizar la probanza de los elementos de la agencia comercial, por medio de los medios de prueba determinados en la legislación nacional

vigente. A todas luces, el Demandante incumplió con la carga de la prueba, evadiendo intencionalmente las determinaciones substanciales y enfocándose en la probanza de aspectos sin importancia o relación para con las pretensiones solicitadas, como ya en múltiples ocasiones se ha demostrado a lo largo de esta contestación.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente al señor Juez, se sirva desestimar los hechos no probados en la demanda en referencia, solo pronunciándose entonces acerca de la existencia de una relación comercial entre las partes, que como ya se ha probado en la presente contestación, se trató de un **CONTRATO PARA LA DISTRIBUCION COMERCIALIZACION Y MARKETING EN COLOMBIA DEL MEDICAMENTO EPIPROT.**

3.6. DEL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y DE LA CLÁUSULA DE RESOLUCIÓN AUTOMÁTICA.

Como se ha reiterado a lo largo de esta contestación, la demandante pretende la declaración de pagos irrisorios partiendo de la supuesta existencia de un contrato de agencia comercial, aun cuando el verdadero contrato de distribución finalizó por su incumplimiento sistemático de las obligaciones plasmadas en el mismo, así como de la expiración del término acordado.

En efecto su señoría, la deuda de la accionante con mi poderdante asciende la suma de cuatro millones setecientos noventa y cinco mil doscientos veintisiete dólares (USD\$4,795,227.79), tal y como consta en el *CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITO* y el *ACUERDO DE PAGO* aportado por la misma demandante.

Resulta pertinente recordar que, en el contrato se pactaron obligaciones respecto las cuales se sometieron las aquí partes en el marco del contrato de distribución objeto de disputa jurídica.

De lo anterior podemos extraer que la accionante era conocedora de las obligaciones a las cuales se comprometió, mediante rubrica, a cumplir en el contrato de distribución. Por lo que también era consciente de las consecuencias que atañería su incumplimiento, al respecto se acordó:

- *"DECIMO QUINTA. - Cumplimiento de las obligaciones. - Cada obligación contraída por el Distribuidor conforme a lo dispuesto en este contrato, se considerará una obligación separada, y la cuestión de sí se ha cumplido total y adecuadamente se decidirá con independencia del hecho de que cualquier otra obligación haya sido cumplida o dejada de cumplir adecuadamente. El cumplimiento en lo sustancial, pero incompleto, **de cualquier obligación no podrá considerarse para ningún propósito como cumplimiento adecuado y completo de la misma.**"*

(Negrilla y subrayado fuera de texto)

- *"DECIMO SEGUNDA. - Objetivos mínimos de compra. -*

1.- Las partes establecen unos objetivos mínimos de compras para el periodo de vigencia del presente contrato.

(...)

3.- El incumplimiento de los objetivos mínimos de compra sobre los objetivos establecidos en el ANEXO 111 y en la estipulación Tercera, punto 3.3, facultará a PRAXIS para resolver el contrato o para designar otro distribuidor en la zona, perdiendo el DISTRIBUIDOR la exclusividad sobre la misma."

- "VIGESIMA. - Extinción y Resolución. - El presente contrato quedará definitivamente extinguido a la finalización del mismo.

También quedará resuelto el presente contrato si -llegada la finalización del plazo pactado, o de cualquiera de sus prórrogas- las partes no hubieren llegado a un acuerdo para la determinación de los nuevos objetivos mínimos de venta y precios.

No obstante, ello, el contrato quedará resuelto en cualquier momento, si concurre alguno de los siguientes hechos citados con carácter enunciativo y no limitativo:

(...)

Ñ) En general el incumplimiento por el DISTRIBUIDOR de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente contrato por cualquiera de las partes.

En el supuesto de incumplimiento por parte del Distribuidor, PRAXIS podrá optar, de conformidad con lo prevenido en el artículo 1.124 del Código Civil Español, entre exigir el cumplimiento de la obligación o resolver el contrato con derecho a ser resarcida en los daños y perjuicios que ello origine, así como al abono de los intereses que se devenguen.

La resolución deberá comunicarse con al menos un mes de antelación a la otra parte" (Negrilla y subrayado fuera de texto)

No queda duda que el contrato podría ser objeto de resolución por la concurrencia del incumplimiento de las obligaciones debidamente acordadas por las partes, así como por la expiración del término acordado.

Incumplimiento este que surge principalmente de la falta de pago oportuno por la demandante y de no disponer de la organización ni de los medios, tanto materiales, como personales, necesarios y suficientes para dar puntual y eficaz cumplimiento al contrato, situación que queda en evidencia por la suscripción de CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITO, el ACUERDO DE PAGO y EL CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL (Este último se adjunta a la presente).

No siendo esto suficiente, la demente acusó una supuesta renovación automática cuando su incumplimiento sistemático y la expiración del término pactado llevo a la finalización del contrato de Distribución. Situación que incluso estaba prevista en la cláusula tercera del mismo así:

*"(...)3.2. Llegado su vencimiento, el contrato podrá ser renovado por sucesivos períodos de dos años, **siempre que se hayan cumplido los objetivos de ventas recogidos en el presente contrato** (o en los sucesivos acuerdos de prórroga), y siempre que las partes lleguen a un acuerdo sobre los nuevos objetivos y precios a aplicar en los años sucesivos.*

De no llegar las partes a un acuerdo antes de la finalización del contrato, éste quedará resuelto sin que se produzca la prórroga establecida en el párrafo anterior. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Es así como queda en evidencia que en el contrato no existía prórroga automática sino la posibilidad de una renovación sucesiva, renovación que estaba supedita al cumplimiento del contrato y al querer de las partes, situaciones que no concurrían como lo pretende hacer valer la demandante.

Así, se colige que no hubo prórroga automática por cuanto no se acordó dicha posibilidad en el contrato, y por el contrario hubo una

terminación por expiración del término pactado mientras que al unísono mediaba un sistemático incumplimiento de INNOFAR.

3.7 DE LA FALTA DE EXCLUSIVIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN Y MARKETING.

La demandante pretende acreditar que en a la relación comercial actuó con exclusividad, afirmando que se dedicaba de tiempo completo a la venta de EPIPROT, así como a su comercialización y promoción.

Intención temeraria que contraria la realidad comercial de la demandante, ya que esta empresa farmacéutica especializada en servicios de outsourcing, marketing, promoción, distribución y comercialización. Presta, además servicios dirigidos hacia la industria farmacéutica en general, con prestación de servicios Outsourcing de fuerzas de promoción, programas para pacientes, distribución de productos, selección de personal, capacitación y formación farmacéutica.¹⁹

Resulta así claro que esta tiene un objeto social amplio que no se limita a la venta de EPIPROT, sino que presta el servicio a diversas empresas y por diversos productos, aspecto que se reflejará, por demás, en las facturas de venta de la demandante.

Cabe mencionar que, la exclusividad pactada en el contrato era frente al a compra del producto EPIPROT® únicamente a PRAXIS, mas no frente a que la demandante se dedicara solamente a la venta de EPIPROT.

¹⁹ <http://www.innofar.com.co>

Una vez más queda en evidencia que se pretende cambiar el sentido de lo acordado y de la realidad comercial que rigió la vida comercial de las partes en vigencia del contrato de distribución.

4. SOLICITADOS POR LA DEMANDANTE:

Ahora bien, es imperante en este acápite referirnos a la no necesidad del decreto y practica de las pruebas testimoniales solicitadas por el demandado, a saber, el testimonio de las señoras: **TATIANA CALDERON ROJAS** y **MARVEL LUZ SANABRIA MONTILLA**.

En primera medida, se determina que, el administrador de justicia debe ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de las pruebas que las partes intentan hacer valer en el proceso jurisdiccional, en el marco de principios como el de economía procesal, utilidad de la prueba, y demás estamentos del derecho procesal colombiano. En ese sentido, la Honorable Corte Constitucional, en **Sentencia C-404/97** (M.P. JORGE ARANGO MEJÍA), ha determinado que:

"PRINCIPIO DE ECONOMIA PROCESAL - Pronto diligenciamiento del proceso / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / RESOLUCION SOBRE EXCEPCIONES.

Las normas consagran dos de los principios reconocidos por el artículo 228 de la Constitución: el primero, el de la economía procesal, en lo que tiene que ver con el pronto diligenciamiento de los procesos: "Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado". El segundo, la primacía del derecho sustancial: "y en ellas (en las

actuaciones de la Administración de Justicia) prevalecerá el derecho sustancial." El inciso segundo del artículo 306 está basado en el principio de la economía procesal. Economía procesal que implica conseguir los resultados del proceso (el establecimiento de la verdad como medio para lograr la realización del derecho sustancial), con el empleo del mínimo de actividad procesal, naturalmente sin violar el derecho fundamental al debido proceso, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Constitución. Es lógico que, si el superior considera infundada la excepción declarada por el inferior, resuelva sobre las demás, sin necesidad de retrotraer todo el proceso a la primera instancia. Al fin y al cabo, el debate sobre las excepciones en la primera instancia es amplio, y dentro de él las partes han tenido oportunidad de esgrimir sus argumentos y las pruebas correspondientes. El principio de la doble instancia no es inflexible. El inciso primero del artículo 31 admite que la ley puede consagrar excepciones. Lo que interesa es esto: el debate sobre las excepciones, sobre todas, se ha dado en la primera instancia".

Es claro entonces, que el deber del administrador de justicia, en valorar la necesidad de practicar las pruebas solicitadas por las partes, con la finalidad de establecer si es imperante al practica de dichas pruebas, o si, por el contrario, dichas pruebas resultan en cargas injustificadas para el proceso judicial; este requerimiento de "necesidad de la prueba", se encuentra determinada mediante el artículo 164 del Código General del proceso, a saber:

"ARTÍCULO 164. NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y

oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho".

Es por ello que, se establece como misión del Juez, el realizar una apreciación o ponderación, lo más exacta posible de los medios de prueba, esta es una condición esencial para poder formular un fallo verdaderamente objetivo, sólido y justo, basado en pruebas positivas, que deben acreditar, entre otros a:

"En el ordenamiento jurídico colombiano, la Ley procesal impone al Juez el estudio anticipado de las pruebas antes de proceder a su ordenación o práctica en el proceso. Para ello, debe verificar que la prueba sea de aquellas permitidas por Ley, que tenga relevancia con el tema debatido y que el hecho que se busque probar no esté suficientemente demostrado en el proceso con otros medios probatorios.

El artículo 167 del CGP señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Así mismo, el artículo subsiguiente (168 del C.G.P.), indica que el juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles"²⁰.

En firme lo anterior, se debe tener un estudio concreto acerca de si los testimonios solicitados por la demanda gozan de utilidad, conducencia, pertinencia y relevancia para probar los supuestos

²⁰ **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - DESPACHO No. 3 DE ORALIDAD.** Magistrado Sustanciador: FABIO IVÁN AFANADOR GARCÍA; radicado: 1500-1333-30-01-2014-00139-02.

facticos del caso de marras, teniendo de presente que algunos de los hechos manifestados por el Demandante, se encuentran debidamente aceptados como ciertos en la presente contestación.

En esta medida, me permito TACACHAR COMO INUTILES los testimonios de:

• **TATIANA CALDERON ROJAS.**

El demandante solicita se practique le testimonio de la mencionada, en el sentido de dar fe o constancia de "la capacitación que brindo INNOFAR al personal a su cargo para lograr colocar en el mercado el producto EPIPROT".

Ahora bien, el presupuesto que se pretende probar, se encuentra determinado en la demanda en el hecho número 23 del correspondiente acápite, el cual se encuentra debidamente aclarado en la presente contestación, de la siguiente manera:

HECHO:

"23. INNOFAR gestionó las actividades correspondientes para capacitar al personal que estaría a cargo de la venta del producto en el territorio nacional, así como a los profesionales de la salud dándoles a conocer las bondades del mismo para que lo tuvieran como una opción importante en el tratamiento del pie diabético y las heridas relacionadas con la diabetes en sus pacientes, y las propias del marketing que demanda este tipo de productos, labores éstas que requirieron un tiempo y unos costos asumidos por INNOFAR conforme así fue su compromiso".

RESPUESTA:

"Es cierto, puesto que las actividades desarrolladas por el Demandante, se estructuran como una necesidad propia del contrato como distribuidor independiente, y las tareas a realizar son evidentes en este tipo de relación contractual, donde, además, si el Distribuidor persigue el aumento de las ganancias, debe promover los productos asumiendo los riesgos del mercado".

Como se evidencia de la simple lectura del hecho – respuesta, las dos partes coincidimos en la afirmación de que, INNOFAR realizó el proceso de capacitación sobre su personal, como una de las necesidades comerciales y contractuales para la distribución, mercadeo y comercialización de un nuevo producto en determinado mercado.

Es claro que INNOFAR debía realizar esta serie de capacitaciones, con a la finalidad de vender el producto EPIPROT, y consecuentemente percibir los ingresos derivados de la actividad comercial legal; lo anterior se determina según lo determinado mediante el numeral 1 de la cláusula Octava del contrato suscrito, a saber:

"El DISTRIBUIDOR podrá establecer libremente y bajo su exclusiva responsabilidad la estructura comercial que estime conveniente para la venta de los productos, contratando al personal necesario, abriendo uno o varios almacenes, vendiendo directamente a minoristas o a consumidores, concediendo créditos y facilidades de pago, etc.; pero no podrá delegar su función en otros intermediarios que operen por cuenta propia. Así, las partes convienen expresamente que INNOFAR no dispone

de la facultad de nombrar sublicenciarios o subdistribuidores para la distribución y comercialización de EIPROT® en Colombia, salvo operadores logísticos o que medie autorización previa, expresa y escrita de PRAXIS".

Es por lo anterior, que los trabajos de capacitación de personal realizados por INNOFAR, no son un tema susceptible de litigio, pues es evidente que estas tareas se desarrollaron en el marco de la necesidad de vender el producto en territorio colombiano.

Por todo lo anterior, es evidente que, el testimonio que pudiere llegar aportar la señora **TATIANA CALDERON ROJAS**, no se determina como útil en el marco del litigio suscito en el caso de marras, y por economía procesal debe no ser decretado de parte del señor Juez.

• **MARVEL LUZ SANABRIA MONTILLA.**

El demandante solicita se practique le testimonio de la mencionada, en el sentido de dar fe o constancia de *"los dineros que INNOFAR invirtió, y los gastos que asumió para poner el producto EIPROT en el mercado nacional"*.

Ahora bien, el presupuesto que se pretende probar, se encuentra determinado en la demanda en los hechos número 20 y 23, del correspondiente acápite, los cuales se encuentran debidamente aclarados en la presente contestación, de la siguiente manera:

HECHO 20:

370

"En el citado contrato se estableció, en la cláusula primera del acápite de las ESTIPULACIONES, que INNOFAR procedería a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EIPROT en régimen de exclusividad, dentro de los límites territoriales de Colombia".

RESPUESTA:

"Es **parcialmente Cierto**, Innofar como entidad independiente asumió un negocio en Colombia asociado a la comercialización bajo su cuenta y riesgo del producto EIPROT, tal y como se determina en el Objeto del contrato en mención, a saber:

"**OBJETO.** - PRAXIS concede a INNOF AR la licencia para la distribución, comercialización y marketing del producto EIPROT® en el país de Colombia. En tal sentido INNOF AR procederá a la distribución, comercialización, marketing y venta del producto EIPROT® en régimen de exclusividad, dentro de los límites territoriales de Colombia, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato, y con pleno respeto a las leyes locales de Colombia, y cualesquiera otras normas y regulaciones que INNOFAR acepta la designación de DISTRIBUIDOR en las condiciones establecidas en el presente documento, manifestando que cuenta con todos los permisos legales necesarios para llevar a cabo el encargo asumido, sin que exista limitación ni reserva alguna que le impida distribuir el producto EIPROT®, cuya distribución ahora se concede, liberando por tanto a PRAXIS de cualquier responsabilidad o reclamación con respecto a la

distribución, comercialización, marketing y venta del producto EPIPROT®, la cual es directa e individualmente asumida por INNOFAR." Subrayado y negrilla propia.

Se resalta que, en el mismo objeto del contrato se encuentra estipulado el régimen de responsabilidad, en el cual PRAXIS se encuentra exonerada de cualquier riesgo en la comercialización en Colombia, del producto EPIPROT".

HECHO 23:

"INNOFAR gestionó las actividades correspondientes para capacitar al personal que estaría a cargo de la venta del producto en el territorio nacional, así como a los profesionales de la salud dándoles a conocer las bondades del mismo para que lo tuvieran como una opción importante en el tratamiento del pie diabético y las heridas relacionadas con la diabetes en sus pacientes, y las propias del marketing que demanda este tipo de productos, labores éstas que requirieron un tiempo y unos costos asumidos por INNOFAR conforme así fue su compromiso".

RESPUESTA:

"Es cierto, puesto que las actividades desarrolladas por el Demandante, se estructuran como una necesidad propia del contrato como distribuidor independiente, y las tareas a realizar son evidentes en este tipo de relación contractual, donde, además, si el Distribuidor persigue el aumento de las ganancias, debe promover los productos asumiendo los riesgos del mercado".

Nuevamente manifestamos al señor Juez que, el testimonio que podría llegar a suministrar la solicitada testigo, no se determine como hechos susceptibles al litigio, puesto que en nada tienen que ver con la existencia o no de un contrato de agencia comercial entre las partes, sino que por el contrario se determinan como elementos contables o económicos propios del marketing realizado de parte de INNOFAR, como una de las necesidades comerciales y contractuales para la distribución, mercadeo y comercialización del producto EPIPROT en el mercado colombiano.

Es claro que INNOFAR debía causar estos gastos de mercadeo, con a la finalidad de vender el producto EPIPROT, y consecuentemente percibir los ingresos derivados de la actividad comercial legal; lo anterior se determina según lo determinado mediante el contrato suscrito.

5. OBJECION A LA ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA JURADA.

Siendo la oportunidad procesal pertinente me permito objetar el juramento estimatorio en cuanto la falta de razonabilidad del monto de los perjuicios reclamados y la carencia de prueba respecto la existencia del perjuicio y monto del mismo, aspectos que llevan a que NO se pueda estar frente a la consecuencia procesal prevista para el juramento estimatorio al ser a todas luces injusta.

Si bien el JURAMENTO ESTIMATORIO esta instituido en el ordenamiento jurídico colombiano como un medio de prueba del monto de los perjuicios pedidos en una demanda, frente a este se debe tener un sustento real y verificable en el marco de las pruebas oportunamente allegadas.

Dichos valores estimados bajo gravedad de juramento, al ser necesaria su proporcionada probanza, también se deben ver reflejados en las consideraciones, así como, consecuentemente en la parte resolutive de libelo de mandatorio, esto debido a que su adecuada y razonable cuantificación, o la falta de estas, irradia toda la demanda.

Como antesala es pertinente traer a colación los artículos que asignan un marco normativo al JURAMENTO ESTIMATORIO; según lo establecido en el **artículo 165** del Código General del Proceso son medios de prueba:

*"La declaración de parte, la confesión, **EL JURAMENTO**, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez". (Negrilla y Mayúscula fuera de texto).*

En un mismo sentido, el **artículo 206** del Código General del Proceso ha determinado la figura del JURAMENTO ESTIMATORIO de la siguiente forma:

*"Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, **deberá ESTIMARLO RAZONADAMENTE BAJO JURAMENTO en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento HARÁ PRUEBA DE SU MONTO mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria***

dentro del traslado respectivo". (Negrilla, subrayado y mayúscula fuera de texto).

En razón a lo ante citado, es notorio que, por mandato expreso del legislador el JURAMENTO ESTIMATORIO es un medio de prueba, que concomitantemente sirve como prueba del importe de los perjuicios requeridos, el cual vale como prueba de dicha estimación, siempre y cuando dicha cuantía se estime de manera razonable y esta no sea debidamente objetada por la parte demandada, dos aspectos que no se acrediten en la presente.

El JURAMENTO ESTIMATORIO resulta siendo una herramienta trascendental que maximiza la actividad probatoria con respecto a la refrendación de las estimaciones reclamadas, pues es una prueba que se podría tornar imperiosa, pero ello no sustrae a la parte de la obligación de estimar dicha suma de forma ordenada, individualizada, razonable y consolidada.

En un mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en sede de revisión de un fallo de tutela SC876-2018, de numero de radicación 11001-31-03-017-2012-00624-01, bajo ponencia del honorable magistrado ARIEL SALAZAR RAMÍREZ, manifestó:

"Además, aunque en la demanda se hizo el juramento estimatorio, tal acto no relevaba a los actores de acreditar la existencia del perjuicio. La prueba del incumplimiento y del menoscabo derivado del mismo era necesaria para la estimación de las pretensiones. Incluso, el párrafo del artículo 206 del Código General del Proceso establece una sanción al

litigante «...en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios...», ello con el condicionamiento establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 2013.

En tal orden, y ante la falta de demostración del incumplimiento imputado a la parte demandada por los conceptos aludidos, debía negarse el petitum, tal y como lo hizo el Tribunal. (Negrilla, subrayado y mayúscula fuera de texto).

Ahora bien, en el caso resulta notorio que la estimación presentada bajo la gravedad de juramento²¹ es desproporcionada, que no se

²¹ El acápite denominado "**JURAMENTO ESTIMATORIO**" señala:

"JURAMENTO ESTIMATORIO

Para efectos de tasar la indemnización equitativa de la que trata el artículo 1324 del Código de Comercio, manifiesto a su Despacho, bajo juramento, que la actora estimados factores esenciales para determinar su monto, a saber: la fecha hasta la cual debía regir el contrato con respecto a la fecha que PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A., sociedad extranjera, tomó para darlo por terminado; y el promedio de la utilidad de los últimos tres años, devengada por INNOFAR.

Aplicando lo anterior se formulan los elementos en que se fundamenta la indemnización solicitada, así:

- a) *La fecha en que debió terminarse el contrato de acuerdo con lo señalado en el mismo, debió ser el día 28 de junio de 2018.*
- b) *PRAXIS PHARMACEUTICALS.A., sociedad extranjera, dio por terminado el contrato el día 31 de marzo de 2017, aduciendo que era la fecha de vencimiento prevista.*
- c) *El tiempo faltante para la terminación del contrato, según lo previsto para las prórrogas, que es de dos años, es de un año y tres meses.*
- d) *El promedio de utilidad de INNOFAR durante los años de vigencia del contrato, esto es desde el 2011 hasta el 2017 fue de cuatro mil quinientos treinta millones setecientos veintinueve mil seiscientos cuarenta pesos (\$4.530729.640).*
- e) *El mencionado promedio aplicándolo en forma proporcional al tiempo faltante para la terminación prevista del contrato, según la*

individualiza la razón de cada monto pretendido de forma objetiva, que no se ordena la discriminación de cada suma, por lo que resulta a ser notoriamente irrazonable e injusta.

La supuesta discriminación de la indemnización no se soporta en pruebas que permitan acreditar su materialización al no existir sustento de los supuestos que en ellos se señalan.

Es así como no se acredita que existió un contrato de agencia comercial y en consecuencia no se puede exigir pago alguno. Tampoco obra prueba alguna que permita evidenciar de manera discriminada el promedio de las supuestas utilidades que alegan ni el importe de la presunta indemnización.

Por lo que no haya sustento que permita acreditar la cuantificación de dichas sumas, sumas que devienen de un querer caprichoso de la demandante y no de pruebas que acrediten su eventual materialización.

Es tan así que, la insigne Corte Constitucional de Colombia en **sentencia de constitucionalidad C-157 de 2013**, en ponencia del M.P. Mauricio González Cuervo al solucionar una acción pública de inconstitucionalidad incoada en hacía del artículo 206 del CGP, en la cual señaló:

prórroga arroja la suma de cinco mil seiscientos sesenta y tres millones cuatrocientos doce mil cincuenta y un pesos (\$5.663'412.051).

f) Por lo anterior, las demandadas adeudan, en forma solidaria a mi poderdante, por concepto de indemnización por terminación unilateral del contrato de agencia comercial la suma de cinco mil seiscientos sesenta y tres millones cuatrocientos doce mil cincuenta y un pesos (\$5.663'412.051)."

*"Señalar la cuantía, por la vía del juramento estimatorio, cuando sea necesario, o por la vía de su estimación razonada, es uno de los requisitos de la demanda, al tenor de lo previsto en el artículo 82, numerales 7 y 9. **ESTE REQUISITO NO ES UN MERO FORMALISMO, PUES GUARDA RELACIÓN CON UN MEDIO DE PRUEBA** y, en todo caso, es necesario para determinar la competencia o el trámite. **POR LO TANTO, SEÑALAR LA CUANTÍA NO ES UN REQUISITO PRESCINDIBLE O CAPRICHOSO, SINO UN PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL TRÁMITE DEL PROCESO.***

(...)

Si en la demanda o en su contestación, la parte o su apoderado, o ambos, suministran información que no corresponda a la verdad, en el artículo 86 se prevé que habrá lugar a remitir las copias pertinentes para los procesos penales y disciplinarios, a imponer una multa y a condenar a una indemnización de perjuicios. Así, la falta de rigor con la veracidad de la información aportada, genera consecuencias penales, disciplinarias y patrimoniales.

(...)

*Por las mismas razones se permite que la parte estime **DE MANERA RAZONADA** la cuantía de los perjuicios sufridos, bajo la gravedad del juramento, y **SE RECONOCE ESTA ESTIMACIÓN COMO MEDIO DE PRUEBA QUE, DE NO SER OBJETADA**, también de manera razonada, o de no mediar notoria injusticia, ilegalidad o sospecha de fraude o colusión, brinda soporte suficiente para una sentencia de condena". (Negrilla, subrayado y mayúscula fuera de texto).*

Respecto a la sanción que prevé el C.G.P sobre la falta de demostración de perjuicios en juramento estimatorio manifestó:

*"La Corte ratifica que el Legislador goza de una amplia libertad de configuración en materia de procedimientos; recordó los límites a los que está sujeta esta libertad; admitió que, dentro de estos límites, el legislador puede imponer a la parte cargas para ejercer sus derechos y acceder a la administración de justicia; analizó, a partir de escenarios hipotéticos, las posibles causas de que se profiera una decisión que niegue las pretensiones por no haberse demostrado los perjuicios. En el análisis precedente, encontró que existe un escenario hipotético, relativo a una interpretación posible de la norma en el cual se podría sancionar a la parte pese a que su obrar haya sido diligente, cuando la decisión de negar las pretensiones obedece a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado, lo cual resulta desproporcionado. Estima la Corte que, pese a esta circunstancia, la norma no resulta desproporcionada en los restantes escenarios hipotéticos, por lo cual optó por proferir una decisión de exequibilidad condicionada. Al aplicar los parámetros dados la Sentencia C-662 de 2004, empleados también en la Sentencia C-227 de 2009, para establecer si la norma demandada preveía una sanción excesiva o desproporcionada, la Corte pudo establecer que **la finalidad de desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias es acorde con el ordenamiento constitucional; que esta norma es potencialmente***

adecuada para cumplir dicha finalidad; y que sólo en uno de los escenarios hipotéticos planteados -en el de que la causa de no satisfacer la carga de la prueba sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado-, la sanción resulta excesiva o desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso”.

Resulta claro que el artículo 206 del estatuto procedimental prevé una sanción de carácter primordialmente objetivo, esto es, dicha sanción se impone sin considerar la buena o la mala fe de las partes, por lo que toda tasación desacertada, cuando supera los márgenes que prevé el referido artículo y no se enmarca en la excepción distinguida por la Corte, se toma como malintencionada.

De la mencionada sentencia se esgrime que el propósito del juramento es favorecer la lealtad y la corrección por lo que dicha estimación no debe ser desproporcionada ni irrazonable, seguidamente deben ser desconocidas de plano aquella que se extralimiten injustificadamente y menoscaben la finalidad de la figura.

Se puede afirmar que, con la simple manifestación de una persona, declarada bajo la gravedad de juramento, basta para entenderse que esta debe cumplir las exigencias normativas expresas, de lo contrario el despacho debe dar por no probadas dichas sumas parciales.

De tal suerte que, el actuar del demandante fue contrario a ley y al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia y de la Corte Suprema de Justicia.

Es así que, en la presente controversia queda al descubierto la transgresión al precepto normativo que señala el juramento estimatorio por la manifiesta omisión en el deber de razonar importe estimado en pruebas que permitir inferir objetivamente la suma jurada.

6. PETICIÓN INDIVIDUALIZADA Y CONCRETA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:

DOCUMENTALES:

- 6.1.** Acta de Declaración extra proceso No. 11, prestada bajo la gravedad de juramento, por la señora ROMERO CALDERÓN ELIZABETH, en la cual se determina la multiplicidad de portafolio de productos comercializados por la Demandante.
- 6.2.** "INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS", emitida por la sociedad española "TEST AUDITORES-CONSULTORES S.L." en la cual se certifican los saldos contables adeudados del cliente INNOFAR S.A.
- 6.3.** Copia de Derecho de petición presentado ante la sociedad INNOFAR S.A., con la finalidad de que se sirvan allegar al proceso una serie de documentos, que evidencian la multiplicidad de actividades comerciales desarrolladas por la Demandante.
- 6.4.** Certificado de envío, con copia cotejada, emitido por la empresa de mensajería INTER RAPIDISIMO, mediante el cual se radica el Derecho de petición anteriormente mencionado en las oficinas sociales de la sociedad Demandante.
- 6.5.** Certificado de entrega exitosa, emitido por la empresa de mensajería INTER RAPIDISIMO, mediante el cual se radicó el Derecho de petición anteriormente mencionado en las oficinas

sociales de la sociedad Demandante.

6.6. Pantallazo correspondiente a la pagina de consulta social RUES, mediante el cual se evidencia la no existencia de la razón social: PRAXIS PHARMACEUTICAL COLOMBIA SAS.

6.7. Pantallazo correspondiente a la publicidad corporativa determinada en las redes sociales (FACEBOOK) de la Demandante, en las cuales ofertan una multiplicidad de servicios similares a la relación comercial determinada con mi Poderdante.

7. ANEXOS:

7.1. Poder General otorgado por el señor **DON AITOR MADINA AGUIRRE**, mayor de edad, domiciliado en el Reino de España, en MIÑANO (ÁLAVA); y quien se identifica con D.N.I./N.I.F. 15378824N, actuando en calidad de representante legal de la sociedad española **PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.**, con C.I.F. B01404821.

7.2. Poder Especial para actuar, otorgado por **VICTOR ANDRÉS GÓMEZ ARDILA** (Apoderado General), en favor de la sociedad de servicios jurídicos **SCIENTIA CONSULTORES S.A.S**

7.3. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad española **PRAXIS PHARMACEUTICAL S.A.**

7.4. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad **SCIENTIA CONSULTORES S.A.S.**, donde figuran los apoderados judiciales que van a actuar en el trámite de la referencia.

7.5. Los documentos relacionados en el capítulo de pruebas.

7.6. Copia de la cédula de ciudadanía de quien actúa como abogado designado por la firma de servicios jurídicos, apoderada en el proceso de la referencia.

7.7. Copia de la tarjeta profesional de quien actúa como abogado designado por la firma de servicios jurídicos, apoderada en el proceso de la referencia.

7.8. Copia de esta contestación de demanda para el archivo del juzgado.

7.9. Copia de esta contestación de demanda para la notificación a la demandante.

7.10. CD contentivo de los documentos relacionados en el acápite de pruebas, y de esta contestación de demanda.

8. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en:

- La calle 111 No. 47 a 96.
- Teléfono: 3143999198
- Dirección electrónica:
scientia.consul@gmail.com y scientia05@gmail.com

Cordialmente,

SANTAFE DE BOGOTÁ D.C. 02 JUN 2021
En la fecha se fija en lista por un (1) día la...
Excepcionalmente Queda a disposición de la parte
contraria por el término de Cinco días, para lo que
estime conveniente.

Edwin Enrique Rodríguez Niño
EDWIN ENRIQUE RODRÍGUEZ NIÑO.

C.C No 1.068.928.056 De Anolaima (Cundinamarca).

T.P. 268.976 Del C.S.J.

SCIENTIA CONSULTORES S.AS.